



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 24 de noviembre de 2014, el particular presentó una solicitud de acceso a la información pública, a través del sistema electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información:

"Entrega por Internet en el INFOMEX"

Descripción clara de la solicitud de información:

"Solicito copia electrónica de la versión pública de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares presuntamente cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el que están involucrados elementos de fuerzas federales, en hechos ocurridos el 30 de junio del año 2014.

CONSIDERANDOS:

I.- El artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública, último párrafo, prevé que la información 'No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad'.

El Instituto Nacional de Migración, mediante oficios INM/DGCD/1445/2014 y INM/DFTAM/4687/2014 (ANEXOS), del 11 de junio de 2014, entregó información que integraba la Averiguación Previa de la PGR por el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, al considerar el propio instituto, que los hechos contenidos en esa averiguación previa eran constitutivos de Violaciones Graves a los Derechos Humanos.

Lo ocurrido en Tlatlaya se perfila como una ejecución extrajudicial, lo cual contraviene los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha firmado el estado Mexicano.

II.- La Ley General de Víctimas establece que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, sobre todo cuando hablamos de hechos que son considerados como graves violaciones a los derechos humanos.

POR TANTO:

Con el fin de salvaguardar la integridad de personas y sus datos personales, solicito una versión pública de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, relacionada con el homicidio de 22 personas en el municipio de Tlatlaya,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Estado de México, en el que están involucrados elementos de fuerzas federales, en hechos ocurridos el 30 de junio del año 2014. Esta versión pública, puede omitir datos personales que faciliten la identificación de sujetos susceptibles de riesgo." (sic)

II. El 07 de enero de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Sistema Infomex, notificó al particular que, con fundamento en el artículo 44 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, ampliaba el plazo para responder a su solicitud de información; dicha prórroga fue motivada de la siguiente manera:

"[...]

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 44 prevé que el plazo de resolución de la solicitud se puede extender por una sola vez y hasta por 20 días hábiles, siempre y cuando se le notifique al solicitante las razones que lo motiven.

Las razones que motivan la prórroga son:

ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA RECABANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

[...]" (sic)

III. El 31 de enero de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el Sistema Infomex, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información, en los siguientes términos:

"[...]

Con fundamento en los artículos 44 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada no puede ser proporcionada debido a que es:

Reservada 12 años.

Motivo del daño por divulgar la información:

Por tratarse de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado.

Ley:

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA GUBERNAMENTAL

Artículo y Fracción

Artículo 14, fracción IV

Archivo 0000700227014_075.pdf

[...]" (sic)



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

El archivo adjunto a la respuesta, contiene copia simple de las siguientes documentales:

- a) Oficio denominado "Hoja de Respuesta a Solicitudes de Información", de fecha 30 de enero de 2015, signado por el Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos siguientes:

"[...]"

De conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la unidad administrativa considerada en el artículo 68 del Código de Justicia Militar, el Supremo Tribunal Militar, mediante oficio número 9892, le otorga la siguiente respuesta:

REQUERIMIENTO:

[Téngase por reproducida la solicitud de Acceso a la Información]

RESPUESTA:

LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA SE ENCUENTRA CLASIFICADA COMO RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 14 FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, TODA VEZ QUE LA CAUSA PENAL MILITAR QUE SE INSTRUYE EN EL FUERO MILITAR ES EXCLUSIVAMENTE POR DELITOS DEL ORDEN MILITAR, **ANEXÁNDOLE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EMITIDA POR EL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ESTA SECRETARÍA.**

LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN AL PERSONAL MILITAR SON: PARA EL OFICIAL DESOBEDIENCIA E INFRACCIÓN DE DEBERES MILITARES CORRESPONDIENTES A CADA MILITAR SEGÚN SU COMISIÓN O EMPLEO Y AL PERSONAL DE TROPA POR INFRACCIÓN DE DEBERES MILITARES CORRESPONDIENTES A CADA MILITAR SEGÚN SU COMISIÓN O EMPLEO, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 301 Y 382 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR.

Esta Dependencia del Ejecutivo Federal reitera a usted su disposición para atender sus solicitudes de manera respetuosa, expedita y con apego a derecho; asimismo, si requiere información adicional, tiene alguna duda sobre el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, se ponen a su disposición el teléfono 5557-3594 y correo electrónico: unidadenlace@mail.sedena.gob.mx de la Unidad de Enlace para cualquier consulta o duda sobre el acceso a la información de esta Secretaría.

"[...]" (sic)



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- b) Oficio número **CI/RIR/2270/14**, de fecha 21 de enero de 2015, denominado **"RESOLUCIÓN DE INFN. RESERVADA"**, signado por los Integrantes del Comité de Información, en los siguientes términos:

"[...]"

VISTO: Para resolver sobre la clasificación de la documentación que da respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, por el C. [...], con número de folio 0000700227014, mediante la cual solicita a esta Secretaría se le proporcione la siguiente información:

'...Solicito copia electrónica de la versión pública de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares presuntamente cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el que están involucrados elementos de fuerzas federales, en hechos ocurridos el 30 de junio del año 2014...' (Sic).

RESULTANDOS:

I.- Con fundamento en los artículos 1/o., 2/o. fracción I, 26 y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Unidad de Enlace de esta Secretaría, remitió la aludida solicitud al **Supremo Tribunal Militar**, unidad administrativa que pudiera contar con la información, de conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 1/o., 3/o., 5/o., 6/o., 7/o. fracción VIII Letra 'A' y 79 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1/o. fracción I del Código de Justicia Militar, para que localizara la información solicitada.

II.- Sobre el particular, el Supremo Tribunal Militar, manifestó que no es posible proporcionar la información a que se hace referencia, en razón de considerarse por disposición expresa de la Ley **como reservada**, al tratarse de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado, aunado a que la causa penal militar que actualmente se instruye en el Fuero de Guerra, es exclusivamente por delitos del orden militar, no encontrándose en el supuesto que prevé el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En razón de lo anterior, este Órgano Colegiado integró el expediente en el que se actúa con el objeto de contar con las constancias y medios de convicción necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Este Comité, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6/o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción III de su Reglamento.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

SEGUNDO.- Durante la Sesión Extraordinaria del Pleno de este Comité, se analizaron las constancias que obran en el expediente que se integró para otorgar la respuesta a la solicitud de acceso a la información en estudio, concluyéndose que el **Supremo Tribunal Militar**, es la unidad administrativa competente para conocer sobre la información requerida.

TERCERO.- Este Comité analizó la procedencia de la clasificación y del periodo que debe permanecer en dicha situación la información que da respuesta al referido requerimiento y con fundamento en los preceptos legales reseñados en el segundo de los resultandos, consideró necesario reservar la citada información en los términos expuestos por el Supremo Tribunal Militar toda vez que la información que puede dar respuesta al requerimiento transcrito, se considera **reservada** de conformidad con lo establecido en el artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tratarse de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado, aunado a que la causa penal militar que actualmente se instruye en el Fuero de Guerra, es exclusivamente por delitos del orden militar.

En mérito de lo expuesto y de conformidad con los artículos 14 fracción IV, 16 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 26 y 27 de su Reglamento, Párrafos Quinto, Noveno, Décimo Sexto y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se:

RESUELVE:

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos citados en los considerandos de la resolución que nos ocupa, este Comité **confirma y declara formalmente la reserva** de la información que pudiera dar respuesta a la solicitud en estudio, razón por la cual se emite la presente **resolución**, misma que se registra en el libro correspondiente con el **No. CI/RIR/2270/14**.

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 72 y 82 de su Reglamento, hágasele saber al C. [...], que queda expedito su derecho para interponer por sí o su representante, el recurso de revisión contra la presente resolución, ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional ubicada en Blvd. Manuel Ávila Camacho Esq. Av. Industria Militar, Col. Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11640, D.F.; el formato y forma de presentación del medio de impugnación podrá obtenerlos en la página de internet del mencionado Instituto, en la siguiente dirección electrónica: http://www.ifai.org.mx/test/new_portal/recurso_r.htm.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

T E R C E R O.- Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría al C. [...] y al **Supremo Tribunal Militar**.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes firman la presente resolución para su debida constancia legal.
[...]” (sic)

IV. El 05 de febrero de 2015, se recibió en este Instituto, a través del Sistema Infomex, el recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual manifestó lo siguiente:

Acto que se recurre y puntos petitorios:

“La Respuesta de la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional a la solicitud de información con folio 0000700227014, fechado del día 30 de enero de 2015, de acuerdo con el cual se me comunicó que la información requerida tiene carácter el carácter de RESERVADA porque los delitos de que se trata son del orden militar y por tratarse de una averiguación que actualmente no ha causado estado.” (sic)

Archivo Adjunto del Recurso de Revisión: 2015000340.docx

Adjunto al recurso de revisión, el particular anexó copia simple de escrito libre sin fecha, en los siguientes términos:

“[...]”

ACTO A IMPUGNAR:

La Respuesta de la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional a la solicitud de información con folio 0000700227014, fechado del día 30 de enero de 2015, de acuerdo con el cual se me comunicó que la información requerida tiene carácter el carácter de RESERVADA porque los delitos de que se trata son del orden militar y por tratarse de una averiguación que actualmente no ha causado estado.

ARGUMENTOS:

I.- El artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública, último párrafo, prevé que la información ‘No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad’.

a) El Instituto Nacional de Migración, mediante oficios INM/DGCD/1445/2014 y INM/DFTAM/4687/2014 (ANEXOS), del 11 de junio de 2014, entregó información que integraba la Averiguación Previa por el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, al considerar el propio instituto que los hechos



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

contenidos en esa averiguación previa eran constitutivos de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, a pesar de que la averiguación seguía abierta.

b) Los hechos ocurridos en Tlatlaya han sido reconocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como violaciones graves o especialmente graves de derechos humanos a lo largo de su recomendación 51/2014. Dicha clasificación fue reconocida por la CNDH mediante acuerdo número CNDH/2/2014/5390/Q.

c) La resolución del Recurso de Revisión 'RDA 4821/14', emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para revocar la clasificación de información hecha por la Procuraduría General de la República, contenida en averiguaciones previas por los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, al considerar que las averiguaciones previas contenidas en la recomendación 51/2014 involucran investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos (la recomendación citada contiene las averiguaciones previas 4 y 5, de competencia militar):

'Este instituto advierte que en la especie y para efectos de acceso a la información relacionada con las averiguaciones previas relacionadas con los eventos sucedidos en dicha comunidad, se actualiza el supuesto previo en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su primera porción normativa, esto es, se trata de un acontecimiento que involucra una investigación de violaciones graves de derechos humanos'.

d) La resolución del Recurso de Revisión 'RDA 5366/14', emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar información que forma parte de averiguaciones previas relacionadas con hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero, al considerar que todas las diligencias sobre el caso están sujetas a un interés público superior al estado de reserva, por tratarse de un caso de violaciones graves a los derechos humanos. Esto se expresa en el siguiente párrafo que integra esa resolución del IFAI:

'En ese sentido, este Instituto considera que tratándose de violaciones graves a derechos humanos existe un interés público superior para conocer todas las diligencias que se están llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables incluyendo los nombres de los servidores públicos que han participado en ellas, ya que no sólo hay una afectación a las víctimas y ofendidos en forma directa por los ilícitos cometidos, sino que se ofende a toda la sociedad, y a la comunidad internacional, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican, entre ellas y, específicamente, para el caso en concreto el hecho de que existan servidores públicos involucrados'.

e) Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante su resolución 30/2014, decidió otorgar medidas cautelares a favor de Clara Gómez González y otros, por considerar que su situación reunía las condiciones de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

gravedad requeridas por el reglamento de la CIDH para estos efectos (punto III.6 de la resolución), al haber sido testigo de los hechos ocurridos en Tlatlaya.

f) Durante la audiencia sostenida por el gobierno mexicano ante la propia CIDH en octubre del 2014, el secretario ejecutivo de este mismo órgano calificó los hechos de Tlatlaya como 'de **extraordinaria gravedad**' (<http://goo.gl/6DZ5M9>).

g) Adicionalmente, según informaciones reportadas por diversos medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional han considerado que el caso Tlatlaya 'se trataría de **una de las violaciones de derechos humanos más graves** de la administración de Enrique Peña Nieto' (Ver: <http://goo.gl/u7wOBI>).

II. Los delitos del orden militar que investiga la Procuraduría Militar (CITO LA RESOLUCIÓN DE INFN. RESERVADA N° CI/RIR/2270/14: para el Oficial Desobediencia e infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según comisión o empleo y al personal de tropa por infracción deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, previstos en los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar) constituyen en sí mismos las violaciones graves a los derechos humanos que documenta la CNDH y por las cuales se emite la Recomendación N° 51/2014 dirigida al 'GENERAL SECRETARIO SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL'. Es decir, la conducta de los elementos militares que transgredió el Código de Justicia Militar está directamente relacionada con las violaciones graves de los derechos humanos y no inconexa con los actos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, como argumenta la Secretaría de la Defensa Nacional. A continuación se citan algunos párrafos de la Recomendación 51/2014 que dan cuenta de esas conductas:

Párrafo 274. También se debe valorar el hecho de que además de las autoridades que ejecutaron y ordenaron estos hechos, le asiste responsabilidad a los servidores públicos que estuvieron presentes, o hayan encubierto esta situación. Debe decirse que por lo que hace a servidores públicos que cometen una violación grave a derechos humanos, su propia defensa frente a un proceso penal no debe nunca obstruir la búsqueda de la verdad. [...]

Párrafo: 391. En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 1º, párrafo tercero, y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción III, 71, párrafo segundo, y 72, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo Nacional considera que en el presente asunto se cuenta con elementos de convicción suficientes para que, en ejercicio de sus atribuciones, presente denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del Estado de México y a la Procuraduría General de Justicia Militar para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades de los servidores públicos que intervinieron en los hechos. Asimismo, presentará formal queja ante la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, y la Visitaduría



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

General referida, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos materia del presente caso.

SEXTA RECOMENDACIÓN PARA EL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL. Gire instrucciones a quien corresponda para que el personal de esa institución se abstenga de participar en la alteración de las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica y jurídica de los mismos y sean capacitados respecto de la preservación de los indicios del delito, y una vez realizado lo anterior se remitan a este Organismo Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

SÉPTIMA RECOMENDACIÓN PARA EL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL. Se colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia se inicie la investigación que en derecho corresponda, por tratarse de servidores públicos cuya conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

III.- En sus 'Consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de guerra' (<http://goo.gl/cfu8KX>), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha explicado que 'por grave violación de los derechos humanos debe entenderse toda acción u omisión con la cual servidores públicos (o personas de condición particular que obran bajo la determinación, con el apoyo o con la aquiescencia de agentes del Estado) vulneran o amenazan severamente alguno de los derechos fundamentales enunciados en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos'.

Tal y como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo explica con detalle, los hechos ocurridos en Tlatlaya violan diversos numerales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ver párrafos 351 y 387 de la recomendación 51/2014).

III.- La Ley General de Víctimas establece que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, sobre todo cuando hablamos de hechos que son considerados como graves violaciones a los derechos humanos.

[...]” (sic)

V. El 05 de febrero de 2015, la Comisionada Presidente de este Instituto asignó el número de expediente **RDA 0463/15** al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente **Francisco Javier Acuña Llamas**, para los efectos del artículo 55, fracción I de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

VI. El 09 de febrero de 2015, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información¹ adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente, acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por el particular en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 88 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

VII. El 10 de febrero de 2015, se notificó al particular, mediante correo electrónico, la admisión del recurso de revisión, informándole sobre su derecho para presentar alegatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* y 86 de su *Reglamento*.

VIII. El 10 de febrero de 2015, el Comisionado Ponente notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Herramienta de Comunicación, la admisión del recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, dando cumplimiento al artículo 88 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

IX. El 17 de febrero de 2015, se recibió en este Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, el oficio número **1205**, de fecha 16 de febrero de 2015, signado por el Presidente del Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional, y dirigido al Comisionado Ponente, mediante el cual se manifestaron los siguientes alegatos:

"[...]

II.- ALEGATOS:

ÚNICO.- El recurrente se inconforma en contra de la respuesta que se le otorgó el 31 de enero de 2015, manifestando: **'...La Respuesta de la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional a la solicitud de información con folio 0000700227014, fechado del día 30 de enero de 2015, de acuerdo con el cual se me comunicó que la información requerida tiene carácter el carácter de RESERVADA porque los delitos de que se trata son del orden militar y por tratarse de una averiguación que actualmente no ha causado estado...'** (SIC).

¹ De conformidad con lo dispuesto por el numeral Primero, fracción IX del *Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, por el que se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia, para coadyuvar con los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos competencia del Instituto.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Sobre el particular, se observa que la apreciación del recurrente resulta ilógica y sin sustento jurídico, toda vez que en la respuesta, se atendió cabalmente su solicitud de información al señalarle que de conformidad con el artículo 14 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la misma se encuentra clasificada como **reservada**, por tratarse de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado, aunado a que la causa penal militar que actualmente se instruye en los tribunales militares, es por la probable responsabilidad en la comisión de delitos por desobediencia e infracción de deberes militares a un Teniente y por infracción de deberes militares al personal de tropa según su comisión o empleo, previstos en los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar, ilícitos que en ningún ordenamiento legal están considerados como constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos como equivocadamente lo indica el recurrente

Aunado a lo anterior, se le ratifica que la indicada causa penal se encuentra en etapa de **instrucción** y que la Ley de la materia **prevé la reserva hasta en tanto no se pronuncie una sentencia definitiva y que la misma haya causado ejecutoria**, siendo el caso que al tratarse de delitos del ámbito castrense que no violan los derechos humanos, se encuentra apegada a derecho la **reserva** invocada por esta Secretaría de Estado; ya que de lo contrario, se violentaría el derecho de los imputados a una defensa adecuada y el principio de presunción de inocencia.

Lo anterior tiene sustento en la siguiente Tesis:

Décima Época, Registro: 2000234, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: la. VI11/2012 (10a.), Página: 656.

'...INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional**
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia del listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Asimismo, sirve de apoyo, el Criterio/2-2014, emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en donde se determinó que **'...Procedimiento administrativo, elementos que deben actualizarse para que se considere seguido en forma de juicio.** Conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se considera información reservada la relativa a las actuaciones y diligencias propias de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no ha causado estado. Para que un procedimiento administrativo se considere seguido en forma de juicio, no basta que se reúnan las formalidades esenciales de un procedimiento y que se otorgue el derecho de defensa; sino que también deberá actualizarse la existencia de dos sujetos en conflicto de intereses y uno que dirima la controversia, toda vez que se trata de un procedimiento heterocompositivo, que se caracteriza por el litigio que se genera entre dos partes, que se resuelve por un tercero. Además de lo anterior, para que un procedimiento administrativo pueda considerarse seguido en forma de juicio, es necesario acreditar que existe: la notificación del inicio del procedimiento; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como de rendir alegatos, y que el procedimiento concluya mediante el dictado de una resolución que dirima la controversia...'(sic).

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 56 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **resulta procedente que el Pleno de ese Instituto, determine confirmar la respuesta otorgada inicialmente.**

En mérito de lo expuesto y fundado a usted C. Comisionado Ponente, se solicita:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 55 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 88 de su Reglamento, se tengan por formulados los presentes alegatos que respaldan y justifican el acto que se impugna.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 56 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se solicita a ese órgano autónomo confirme la respuesta otorgada al recurrente por las razones ya enunciadas.

[...]” (sic)

X. El 04 de marzo de 2015, el Pleno de este Instituto acordó, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 55 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, ampliar el plazo al que se refieren las fracciones I y V del mismo artículo, para resolver el presente asunto.

XI. El 05 de marzo de 2015, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información acordó la comparecencia a una reunión de acceso a la información al sujeto obligado, con fundamento en los artículos 55 fracción III y 17 último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, así como en el Acuerdo del Pleno **ACT/04/03/2015.02**, a celebrarse el día 11 de marzo de 2015 en las instalaciones de este Instituto.

En este orden de ideas, también se requirió al sujeto obligado para que presentara las documentales que dieran contestación a lo solicitado por el particular.

XII. El 09 de marzo de 2015, mediante el sistema denominado Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, el Comisionado Ponente notificó al sujeto obligado el acuerdo referido en el antecedente inmediato anterior.

XIII. El 11 de marzo de 2015, se celebró en las instalaciones de este Instituto el acceso a la información, con la comparecencia del sujeto obligado, por conducto de: el Titular de la Unidad de Enlace; el Segundo Secretario del Juzgado Sexto Militar y el Mayor de Justicia Militar, todos dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El acta del acceso que se levantó señala en su parte conducente lo siguiente:

“[...]”

Una vez abierto el acceso, el sujeto obligado, en uso de la palabra, señaló lo siguiente:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que la Averiguación Previa iniciada en contra del personal militar se inició por delitos del orden castrense, tales como desobediencia e infracción de deberes militares, acontecidos el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México.
- Que la competencia de los Tribunales Militares para conocer de los citados delitos del orden militar se sustentan en los artículos 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 57 y 58 del Código de Justicia Militar.
- Que la Averiguación Previa de mérito ya fue consignada, y actualmente tiene la naturaleza de causa penal, y se encuentra radicada en su totalidad, en original, en el Juzgado Sexto Militar, bajo el número de partida 338/14, cuya etapa procesal es la instrucción, existiendo pruebas pendientes por desahogarse; por lo que la misma, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se encuentra reservada.
- Que el bien jurídico que tutelan los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar, por los que están siendo procesados el personal militar, dentro de la causa penal 338/14, es la disciplina militar, por la probable comisión de los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares correspondientes a cada militar, según su comisión o empleo.
- Que los hechos constitutivos de probables violaciones a derechos humanos no son materia de la causa penal 338/14, puesto que en ésta, se investiga la comisión de conductas probablemente constitutivas de delitos previstos en el Código de Justicia Militar.
- Que las únicas personas que pueden tener acceso a la causa penal son las partes; de lo contrario, se vería afectado el derecho al debido proceso, toda vez que aún no se ha emitido la sentencia definitiva en el presente asunto.
- Que debido a la naturaleza de la documental clasificada, no se presenta la misma en el local de este Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

[...]” (sic)

XIV. El 20 de marzo de 2015, se notificó al particular, mediante correo electrónico, la resolución de ampliación referida en el antecedente número X de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

XV. El 20 de marzo de 2015, el Comisionado Ponente notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Herramienta de Comunicación, la resolución de ampliación referida en el antecedente número X de la presente resolución.

XVI. El 15 de abril de 2015, este Instituto formuló un requerimiento de información adicional al sujeto obligado, a través del cual le solicitó, con fundamento en el artículo 89 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, lo siguiente:

"[...]

- Remita a este Instituto el oficio por conducto del cual la Procuraduría General de Justicia Militar envió el pliego de consignación correspondiente, al Supremo Tribunal Militar de la secretaría de la Defensa Nacional, derivado de la Averiguación Previa iniciada en contra de personal militar por delitos del orden castrense, y relacionada con los hechos ocurridos en Tlatlaya Estado de México, el 30 de junio de 2014.
- Asimismo y toda vez que en el desahogo de la diligencia de acceso a la información antes referida, no exhibió la información clasificada como reservada, se requiere remita a este Organismo Garante, las manifestaciones que estime pertinentes, a efecto de resolver lo que en derecho proceda, en el presente asunto.

[...] (sic)

XVII. El 15 de abril de 2015, se notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional el requerimiento de información adicional de mérito, a través de la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal.

XVIII. El 20 de abril de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional atendió el requerimiento de información adicional formulado y, remitió a este Instituto el oficio número **TAI/SSACI/2955**, de la misma fecha de su emisión, firmado por el Titular de la Unidad de Enlace del sujeto obligado, y dirigido al Comisionado Ponente, en los siguientes términos:

"[...]

En atención a su oficio número **IFAI-OA/Comisionados/FJALL/2S.01/039/15** de fecha 15 de abril de 2015, relacionado con el Recurso de Revisión número **RDA 0463/15**, deducido de la solicitud de información con número de folio **0000700227014**; hago de su conocimiento que el **Supremo Tribunal Militar y la Procuraduría General de Justicia Militar, como respuesta a sus requerimientos de información adicional, le hacen saber lo siguiente:**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

1. **Remita a este Instituto el oficio por conducto del cual la Procuraduría General de Justicia Militar envió el pliego de consignación correspondiente, al Supremo Tribunal Militar de la secretaria de la Defensa Nacional, derivado de la Averiguación Previa iniciada en contra de personal militar por delitos del orden castrense, y relacionada con los hechos ocurridos en Tlatlaya Estado de México, el 30 de junio de 2014.**
2. **Asimismo y toda vez que en el desahogo de la diligencia de acceso a la información antes referida, no exhibió la información clasificada como reservada, se requiere remita a este Organismo Garante, las manifestaciones que estime pertinentes, a efecto de resolver lo que en derecho proceda, en el presente asunto.**

El artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone:

'También se considerará como información reservada:

(...) IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado...'

A su vez, la solicitud de acceso a la información hecha originalmente, se refiere a lo siguiente:

[Téngase por reproducida la solicitud de Acceso a la Información]

Al respecto, se le manifiesta que la Procuraduría General de Justicia Militar, en ningún caso, remite pliego de consignación alguna al Supremo Tribunal Militar; el pedimento correspondiente, es remitido por la indicada Procuraduría a los Juzgados Militares por conducto de la Comandancia de la I Región Militar (MÉXICO, D.F.).

Bajo este contexto, **el oficio solicitado es inexistente**; sin embargo, existe un oficio mediante el cual la indicada Región remitió al Juzgado 6/o. Militar, el pedimento correspondiente en contra de personal militar por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos del orden castrense (DESOBEDIENCIA e INFRACCIÓN DE DEBERES MILITARES); con motivo de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Lo anterior, en concordancia a lo estipulado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que dota a los tribunales de plena autonomía para la emisión y cumplimiento de sus determinaciones.

En el concepto de que el indicado oficio corre agregado a la Causa Penal respectiva, motivo por el cual la Procuraduría General de Justicia Militar y el Supremo Tribunal Militar, e incluso el propio Juez de la Causa, **se encuentran legalmente impedidos para proporcionar cualquier documentación e información que obre dentro del expediente judicial**, ya que de lo contrario, se violentaría el debido proceso en



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

perjuicio de los encausados, a quienes nuestra Carta Magna les consagra el principio de presunción de la inocencia hasta en tanto no se les dicte sentencia firme.

Por lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la reserva del documento requerido salvaguarda derechos fundamentales de terceras personas, como se expuso en los argumentos de hecho y de derecho contenidos en el oficio No. 1205 de fecha 16 de febrero de 2015, emitido por el Comité de Información de esta Secretaría.

Siendo importante destacar que la Causa Penal que nos ocupa, se encuentra en etapa de instrucción por delitos exclusivos del orden militar; y dentro de la misma, el personal militar procesado, ha señalado expresamente su oposición a la difusión de sus nombres y demás datos personales.

En concordancia con esto último, el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que se considera como información reservada, lo relativo a los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado; y por ende, no opera la excepción prevista en este último numeral, en razón de que no se trata en modo alguno de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, en virtud de que esto último corresponde de manera exclusiva a las autoridades civiles competentes.

En razón de lo anterior, es claro que el derecho de acceso a la información, colisiona, por un lado, con el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales y a su oposición a la difusión de los mismos; y por otro, con las máximas prerrogativas que otorga la Carta Magna a favor de todo imputado, de que se le considere inocente hasta en tanto no se le dicte sentencia condenatoria firme o irrevocable, así como al respeto del debido proceso; garantías que guardan una relación directa e inseparable del resto de las prerrogativas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a cualquier persona en un régimen democrático de derecho.

Bajo este contexto, es imperioso resaltar que esta Secretaría y particularmente los tribunales militares se encuentran obligados a garantizar el debido proceso a favor de los inculcados, en términos de lo establecido en los artículos 1/o., 14, 16, 20 y 133 de la Constitución Federal, y 13 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; que en términos generales consagran la reserva de aquella información que al hacerla pública puede causar un serio perjuicio a la impartición de justicia, a las estrategias procesales o a los procesos judiciales, hasta en tanto no causen estado.

Por lo expuesto y fundado, a Usted C. Comisionado Ponente del IFAI., me permito solicitar:

ÚNICO: Me tenga por presentado en tiempo y forma desahogando el presente requerimiento de información adicional, en términos de las consideraciones de hecho y



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

de derecho expresadas con anterioridad; y conforme a los argumentos esgrimidos en el
oficio No. 1205 de fecha 16 de febrero de 2015, emitido por el Comité de Información de
esta Secretaría.

[...]” (sic)

XIX. El 08 de junio de 2015, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la
Información acordó la comparecencia una segunda reunión de acceso a la
información al sujeto obligado, con fundamento en los artículos 55 fracción III y 17
último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental*, así como en el Acuerdo del Pleno **ACT/04/03/2015.02**, a
celebrarse el día 15 de junio de 2015 en las instalaciones de este Instituto.

En este orden de ideas, también se requirió al sujeto obligado para que solicitara
al Juzgado Sexto Militar, exhibiera ante este Órgano Garante la averiguación
previa actualmente inmersa en la causa penal número **338/14**, radicada en el
juzgado de referencia.

XX. El 09 de junio de 2015, mediante el sistema denominado Herramienta de
Comunicación con la Administración Pública Federal, el Comisionado Ponente
notificó al sujeto obligado el acuerdo referido en el antecedente inmediato anterior.

XXI. El 15 de junio de 2015, se celebró en las instalaciones de este Instituto el
acceso a la información, con la comparecencia del sujeto obligado, por conducto
de: el Titular de la Unidad de Enlace; el Segundo Secretario del Juzgado Sexto
Militar y el Mayor de Justicia Militar, todos dependientes de la Secretaría de la
Defensa Nacional.

El acta del acceso que se levantó señala en su parte conducente lo siguiente:

“[...]”

Una vez abierto el acceso, el sujeto obligado, en uso de la palabra, señaló lo
siguiente:

- Que el artículo 13 Constitucional otorga jurisdicción al fuero de guerra.
- Que los asuntos del orden militar señala la Corte Internacional, deben juzgarse por
los Tribunales Militares competentes.
- Que el artículo primero del Código de Justicia Militar refiere la organización militar,
y asimismo se encuentra plasmado quienes son los administradores de la Justicia
Militar.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

- Que el artículo 77, fracción III del Código de Justicia Militar, establece las facultades del Secretario del Juzgado respecto del control de los expedientes en los juzgados militares.
- Que la competencia de los Tribunales Militares para conocer de los citados delitos del orden militar se sustenta en los artículos 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 57 y 58 del Código de Justicia Militar.
- Que la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, no versa sobre delitos civiles, limitándose únicamente a conocer de delitos inherentes al orden castrense.
- Que la Procuraduría General de Justicia Militar tiene a cargo la persecución de los delitos del orden militar, debiendo integrar la averiguación previa correspondiente.
- Que de ejercitarse la acción penal, la averiguación previa se remite a los juzgados militares, quienes tienen la función de determinar si se actualizan los delitos correspondientes.
- Que el artículo 439 del Código de Justicia Militar, establece quienes son las partes que tienen acceso a la causa penal de mérito.
- Que las funciones del Supremo Tribunal Militar, y Consejos de Guerra ordinarios y extraordinarios, tienen sus funciones definidas en el Código de Justicia Militar.
- Que las funciones de los jueces militares, no se encuentran plasmadas dentro de ordenamientos de carácter administrativo, si no, dentro del Código de Justicia Militar.
- Que el Supremo Tribunal Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la facultad de revisar en segunda Instancia las decisiones de los Juzgados Militares, por lo que éstos y aquéllos no se encuentran vinculados de manera administrativa alguna.
- Que las resoluciones emitidas por el Juzgado Sexto Militar no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional establecen las funciones de las diversas unidades administrativas de la dependencia, siendo que la organización y funcionamiento de los Órganos del Fuero de Guerra y de los Juzgados Militares se encuentran establecido en el Código de Justicia Militar.
- Que la causa penal se encuentra en fase de instrucción, con pruebas pendientes por desahogar, sin que al presente momento haya causado estado.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que la averiguación previa de mérito, actualmente forma parte de la causa penal número 338/14.
- Que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por lo que no podría juzgarse las mismas acciones dentro del fuero civil, y el militar.

Para efectos de la presente acta de acceso a la información, los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional manifestaron lo siguiente:

- LA AVERIGUACIÓN PREVIA ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE **CAUSA PENAL** DESDE EL MOMENTO EN QUE FUE RADICADA EN EL JUZGADO 6/o. MILITAR; NO EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE CONSIDERARLOS COMO DOCUMENTOS AISLADOS.
- EL JUZGADO 6/o. INSTRUYE LA CAUSA PENAL NÚMERO 338/2014, A PERSONAL MILITAR POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE DESOBEDIENCIA E INFRACCIÓN DE DEBERES, QUE SON DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL FUERO DE GUERRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 13, 17, 20, 21, 113 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 57 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, Y EN ACATAMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015, SOBRE LOS CASOS RADILLA PACHECO, FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS, MEDIANTE LA CUAL SE DELIMITA LA JURISDICCIÓN MILITAR PARA JUZGAR EXCLUSIVAMENTE A PERSONAL MILITAR, Y CON MOTIVO DE ACTOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LA DISCIPLINA MILITAR; ENCONTRÁNDOSE JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA EXHIBIR CUALQUIER DOCUMENTO QUE ESTÉ AGREGADO A LA CAUSA PENAL, YA QUE DE LO CONTRARIO, VIOLENTARÍA EL DEBIDO PROCESO E INCURRIRÍA EN RESPONSABILIDAD.
- EL JUZGADO 6/o. MILITAR ESTÁ **IMPOSIBILITADO JURÍDICAMENTE PARA EXHIBIR ANTE EL INAI., CUALQUIER DOCUMENTO CONTENIDO EN LA CAUSA PENAL**; YA QUE DE LO CONTRARIO VIOLENTARÍA EL DEBIDO PROCESO EN PERJUICIO DE LOS INCUPLADOS E INCURRIRÍA EN **RESPONSABILIDAD PENAL**. POR LO QUE SUS RESOLUCIONES SON DE NATURALEZA JURISDICCIONAL Y, POR ENDE, AUTÓNOMAS E INDEPENDIENTES A LAS QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO EMITE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
- LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN TIENE UN SÓLIDO FUNDAMENTO LEGAL BASADO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LAS LEYES GENERAL Y FEDERAL DE TRANSPARENCIA; QUE OBLIGAN A LOS TRIBUNALES MILITARES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS Y LA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA IMPARCIAL Y EXPEDITA, **SALVAGUARDANDO A LA VEZ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PROCESADOS A QUIENES LA CARTA MAGNA LES**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

CONSAGRA A SU FAVOR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
HASTA EN TANTO NO SE LES DICTE SENTENCIA CONDENATORIA FIRME.

- LA CAUSA PENAL DEBE PRESERVARSE BAJO EL SECRETO DEL JUZGADO 6/o. MILITAR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL **ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR**, SIN QUE PUEDAN TENER ACCESO AL EXPEDIENTE PERSONAS AJENAS A LOS PROCESADOS, SUS DEFENSORES Y EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR.
- EXISTE CONSTANCIA DE QUE LOS PROCESADOS HAN MANIFESTADO EXPRESAMENTE SU OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CAUSA PENAL.
- CUALQUIER REQUERIMIENTO DE CONSULTA AL EXPEDIENTE, DEBE SER SOLICITADO OFICIAL Y DIRECTAMENTE AL C. JUEZ 6/o. MILITAR, QUIEN RESOLVERÁ LO CONDUENTE CONFORME A LA AUTONOMÍA QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SE LE EXHIBE COMO DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 301, 303 Y 382 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR.

Por último, cabe señalar que debido a la naturaleza de la documental clasificada, no se presenta la misma en el local de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.

[...]” (sic)

XXII. El 18 de junio de 2015, se dirigió al Juez Sexto Militar el oficio número **INAI/FJALL/058/15**, de fecha 18 de junio de 2015, signado por el Comisionado Ponente, en los siguientes términos:

“[...]

En atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio **0000700227014**, por virtud de la cual un particular requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional: **‘... copia electrónica de la versión pública de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares presuntamente cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el que están involucrados elementos de fuerzas federales, en hechos ocurridos el 30 de junio del año 2014.’** (Sic)

Al respecto, el Comité de Información de esa dependencia del Ejecutivo Federal mediante resolución número **CI/RIR/2270/14**, de fecha 21 de enero de 2015, determinó confirmar la reserva de la información en comento, señalando al efecto que: **‘...el Supremo Tribunal Militar, manifestó que no es posible proporcionar la información a que se hace referencia, en razón de considerarse por disposición expresa de la Ley**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

como reservada, al tratarse de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado, aunado a que la causa penal militar que actualmente se instruye en el Fuero de Guerra, es exclusivamente por delitos del orden militar, no encontrándose en el supuesto que prevé el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.'

Dicha respuesta generó la interposición ante este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Recurso de Revisión, con número de expediente **RDA 0463/15**, turnado a la Ponencia a mi cargo.

En este sentido, durante la tramitación del asunto de mérito, el Pleno de este Instituto en sesión de fecha tres de junio del año en curso, instruyó al suscrito posponer la votación del mismo, a efecto de **'...que cuente con los elementos suficientes para abordar el presente asunto y se allegue de la información necesaria que permita resolver el fondo del mismo'**.

Derivado de lo anterior, en fecha quince de junio del presente año, en las oficinas de este Instituto se convocó a esa Secretaría a una segunda diligencia de acceso a la información clasificada; sin embargo, en el Acta levantada al efecto, se asentó, entre otras manifestaciones vertidas por los servidores públicos, lo siguiente:

- **CUALQUIER REQUERIMIENTO DE CONSULTA AL EXPEDIENTE, DEBE SER SOLICITADO OFICIAL Y DIRECTAMENTE AL C. JUEZ 6/o. MILITAR, QUIEN RESOLVERÁ LO CONDUCENTE CONFORME A LA AUTONOMÍA QUE LE OTORGA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

En virtud de lo anterior, así como en estricto acatamiento a la instrucción emitida por el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el Acta número **ACT-PUB/03106/2015** de fecha tres de junio del presente año y de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual dispone que **En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso**, es que de la manera más respetuosa, me permito solicitar a Usted:

Que tenga a bien brindar al suscrito, las facilidades necesarias para que se me permita el acceso a la Averiguación Previa que se encuentra agregada a la causa penal bajo el número de partida 338/14, radicada en ese Juzgado a su digno cargo.

Para tal efecto, y toda vez que la presente petición extraordinaria se emite como diligencia de mejor proveer, y con el objeto de encontrar la más viable solución para la adecuada tramitación del recurso de revisión, en un afán de ser exhaustivo y brindar la debida certeza, en armonía con la instrucción del Pleno, es que me encuentro en la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional**
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

disposición de acudir a las oficinas de ese Juzgado Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar si usted me lo concede, el día lunes, en el horario en que sus actividades lo permitan, a fin de concretar la diligencia de acceso a la información clasificada.

Las constancias que se tengan a la vista, no por ese hecho perderán su condición actual de información reservada, toda la información y en general el transcurso del acceso se manejara con la debida confidencialidad por parte de quienes atiendan la misma.

Sin más por el momento, quedo en espera de su amable respuesta al presente.

[...] (sic)

Cabe señalar que el oficio de referencia, ostenta el sello de recibido por parte de la Dirección General de Archivo e Historia, de la Secretaría de la Defensa Nacional con fecha 18 de junio de 2015.

XXIII. El 18 de junio de 2015, este Instituto remitió al sujeto obligado a través de la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, copia simple del oficio descrito en el antecedente inmediato anterior.

XXIV. El 19 de junio de 2015, se recibió en este Instituto el oficio número **M3-1465**, de la misma fecha de su recepción, signado por el Juez Sexto Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y dirigido al Comisionado Ponente, en los siguientes términos:

"[...]"

En relación a lo solicitado en el documento referido en antecedentes y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 6, 8, 13, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 fracción V, 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 113 fracciones X y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 439 del Código de Justicia Militar, se le hace de su conocimiento que este Órgano Jurisdiccional dará vista a las partes sobre su pretensión, tomando en cuenta que la Causa Penal a que hace referencia se encuentra actualmente dentro del período de Instrucción.

En virtud de lo anterior, tan pronto se cuente con las manifestaciones vertidas por la Represente Social y la Defensa del personal Militar del caso Tlatlaya, se le hará de su conocimiento el acuerdo caído a su solicitud.

[...] (sic)

XXV. Al día de la presente resolución no se recibieron en este Instituto alegatos por la parte recurrente.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

CONSIDERANDOS

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo ordenado en el artículo 6o, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 2014; en el artículo 3o, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015; lo dispuesto en los artículos 37, fracción II, 49, 50 y 55, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002; los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003; los artículos 15, fracciones I y III, 21, fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2014; así como el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por el que se modifica la denominación de este Instituto, por la de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 2010.

Segundo. El ahora recurrente solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, en la modalidad de "Entrega preferente por Internet en el Infomex", copia electrónica de la versión pública de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares presuntamente cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el que están involucrados elementos de fuerzas federales, en los hechos ocurridos el 30 de junio del año 2014.

Aunado a lo anterior, el particular vertió las siguientes consideraciones:

- Que el artículo 14 último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, prevé que no podrá invocarse el



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

carácter de reservado de la información, cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de que la averiguación previa correspondiente, siga abierta.

- Que el Instituto Nacional de Migración entregó información que integraba la averiguación previa por el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, al considerar el propio Instituto que los hechos contenidos en esa averiguación previa eran constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de que la averiguación seguía abierta.
- Que lo ocurrido en Tlatlaya se perfila como una ejecución extrajudicial, lo que contraviene los tratados internacionales sobre derechos humanos que a firmado el Estado Mexicano.
- Que la *Ley General de Víctimas* establece que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, sobre todo cuando hablamos de hechos que son considerados como graves violaciones a los derechos humanos.

En respuesta, y posterior a una prórroga para dar contestación a la solicitud de acceso a la información, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Supremo Tribunal Militar, señaló al recurrente que la información solicitada se encontraba reservada, por un período de 12 años, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, en virtud de que se trata de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado, y la casusa penal que se instruye es exclusivamente por delitos del orden militar.

Asimismo, precisó que los delitos que se le imputan al personal militar son, para el oficial, desobediencia e infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, y al personal de tropa por infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, de conformidad con los artículos 301 y 382 del *Código de Justicia Militar*.

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado anexó la resolución signada por los miembros del Comité de Información, mediante la cual **confirmó y declaró formalmente la reserva** de la información solicitada por el particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Inconforme con la respuesta proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el particular presentó recurso de revisión, mediante el cual manifestó como agravio, la reserva de la información requerida.

No obstante lo anterior, además de reiterar las manifestaciones vertidas en su solicitud inicial, el particular efectuó las siguientes manifestaciones:

- Que los hechos ocurridos en Tlatlaya han sido reconocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como violaciones graves o especialmente graves de derechos humanos, mediante su recomendación 51/2014; precisando que dicho reconocimiento se realizó mediante acuerdo número CNDH/2/2014/5390/Q.
- Que en la resolución del recurso de revisión RDA 4821/14, emitida por este Instituto, se revocó la clasificación invocada por la Procuraduría General de la República, respecto de información contenida en averiguaciones previas por los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, al considerar que las averiguaciones previas contenidas en la recomendación 51/2014 involucran investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos.
- Que la resolución del recurso de revisión RDA 5366/14, emitida por este Instituto, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar la información que forma parte de averiguaciones previas relacionadas con hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero, al considerar que todas las diligencias sobre el caso están sujetas a un interés público superior al estado de reserva, por tratarse de un caso de violaciones graves a los derechos humanos.
- Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante su resolución 30/2014, decidió otorgar medidas cautelares a favor de la testigo de los hechos ocurridos en Tlatlaya, por considerar **que su situación reunía las condiciones de gravedad** requeridas por el Reglamento de la citada Comisión (punto III.6 de la resolución).
- Que durante la audiencia sostenida por el Gobierno mexicano ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre del 2014, el Secretario Ejecutivo de ese órgano calificó los hechos de Tlatlaya como "de **extraordinaria gravedad**".



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que según información reportada por diversos medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, así como Amnistía Internacional, han considerado que el caso Tlatlaya 'se trataría de **una de las violaciones de derechos humanos más graves** de la administración de Enrique Peña Nieto.
- Que los delitos que investiga la Procuraduría Militar constituyen en sí mismos violaciones graves a los derechos humanos, toda vez que las conductas de los elementos que transgredieron el *Código de Justicia Militar*, están directamente relacionadas con dichas violaciones.
- Que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha explicado que por grave violación a los derechos humanos, debe entenderse toda acción u omisión con la cual servidores públicos (o personas de condición particular que obran bajo la determinación, con el apoyo o con la aquiescencia de agentes del Estado) vulneran o amenazan severamente alguno de los derechos fundamentales enunciados en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Que tal y como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo explica con detalle, los hechos ocurridos en Tlatlaya violan diversos numerales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Que la *Ley General de Víctimas* establece que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, sobre todo, cuando se trata de hechos que son considerados como graves violaciones a derechos humanos.

Una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, en vía de alegatos, el sujeto obligado, a través del Comité de Información, manifestó lo siguiente:

- Que la apreciación del recurrente resulta ilógica y sin sustento jurídico, toda vez que la respuesta proporcionada se atendió cabalmente, al señalarle que de conformidad con el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, la misma se encontraba clasificada como **reservada**, por tratarse de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado.
- Que aunado a lo anterior, la causa penal militar que actualmente se instruye en los tribunales militares, es por la probable responsabilidad en la comisión de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

delitos por desobediencia e infracción de deberes militares a un Teniente, y por infracción de deberes militares al personal de tropa según su comisión o empleo, de conformidad con los artículos 301 y 382 del *Código de Justicia Militar*; ilícitos que en ningún ordenamiento legal están considerados como constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, como equivocadamente lo indica el recurrente.

- Que se ratifica que la indicada causa penal se encuentra en etapa de **instrucción** y que la Ley de la materia **prevé la reserva hasta en tanto no se pronuncie una sentencia definitiva y que la misma haya causado ejecutoria.**
- Que al tratarse de delitos del ámbito castrense que no violan los derechos humanos, se encuentra apegada a derecho la **reserva** invocada por esa Secretaría de Estado; ya que, de lo contrario, se violentaría el derecho de los imputados a una defensa adecuada y el principio de presunción de inocencia.
- Que sirve a apoyo lo establecido en el Criterio **2-2014**, emitido por el Pleno de este Instituto, mismo en el que se señala que para que un procedimiento administrativo se considere seguido en forma de juicio, no basta que se reúnan las formalidades esenciales de un procedimiento y que se otorgue el derecho de defensa; sino que también deberá actualizarse la existencia de dos sujetos en conflicto de intereses y uno que dirima la controversia.

Finalmente, como parte de sus alegatos, el sujeto obligado, con fundamento en el artículo 56, fracción II de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, solicitó a este Instituto **confirmar** la respuesta otorgada al particular.

A mayor abundamiento, este Instituto acordó una diligencia de acceso a la información reservada, misma que fue debidamente notificada al sujeto obligado.

En congruencia con lo anterior, durante el desahogo de la diligencia de mérito, la Secretaría de la Defensa Nacional vertió las siguientes manifestaciones:

- Que la Averiguación Previa iniciada en contra del personal militar, se impetró por delitos del orden castrense, tales como desobediencia e infracción de deberes militares, acontecidos el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que la competencia de los Tribunales Militares para conocer de los citados delitos del orden militar se sustentan en los artículos 13 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, y 57 y 58 del *Código de Justicia Militar*.
- Que la Averiguación Previa de mérito ya fue consignada, y actualmente tiene la naturaleza de causa penal, y se encuentra radicada en su totalidad, en original, en el Juzgado Sexto Militar, bajo el número de partida 338/14, cuya etapa procesal es la instrucción, existiendo pruebas pendientes por desahogarse; por lo que la misma, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se encuentra reservada.
- Que el bien jurídico que tutelan los artículos 301 y 382 del *Código de Justicia Militar*, por los que están siendo procesados el personal militar, dentro de la causa penal 338/14, es la disciplina militar, por la probable comisión de los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares correspondientes a cada militar, según su comisión o empleo.
- Que los hechos constitutivos de probables violaciones a derechos humanos no son materia de la causa penal 338/14, puesto que en ésta, se investiga la comisión de conductas probablemente constitutivas de delitos previstos en el *Código de Justicia Militar*.
- Que las únicas personas que pueden tener acceso a la causa penal son las partes; de lo contrario, se vería afectado el derecho al debido proceso, toda vez que aún no se ha emitido la sentencia definitiva en el presente asunto.
- Que debido a la naturaleza de la documental clasificada, no se presentó la misma en el local del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Derivado de lo antes expuesto, se determinó efectuar un requerimiento de información adicional a la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual se le solicitó remitiera a este Instituto, el oficio por conducto del cual la Procuraduría General de Justicia Militar envió el pliego de consignación correspondiente al Supremo Tribunal Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado de la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

averiguación previa iniciada en contra de personal militar por delitos del orden castrense, y relacionada con los hechos ocurridos en Tlatlaya Estado de México, el 30 de junio de 2014; en este sentido, también se le solicitó que efectuara las manifestaciones que estimara pertinentes a efecto de resolver lo que en derecho procediera.

En respuesta al requerimiento de información adicional de referencia, el sujeto obligado manifestó que en ningún caso, se remite pliego de consignación alguno al Supremo Tribunal Militar; por lo que precisó que el pedimento correspondiente es remitido por la Procuraduría General de Justicia Militar, a los Juzgados Militares, por conducto de la Comandancia de la I Región Militar.

Así las cosas, y en congruencia con lo anterior, el sujeto obligado precisó que el oficio solicitado es inexistente; sin embargo, aludió a la existencia de un diverso oficio mediante el cual la referida Región Militar remitió al Juzgado 6° Militar el pedimento correspondiente en contra de personal militar por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos del orden castrense, con motivo de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

En suma de las manifestaciones antes referidas, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el oficio aludido, corre agregado a la causa penal respectiva, motivo por el cual la Procuraduría General de Justicia Militar y el Supremo Tribunal Militar, e incluso el Juez de la Causa, se encuentran legalmente impedidos para proporcionar cualquier documentación e información que obre dentro del expediente judicial de mérito.

Derivado de lo anterior, este Instituto acordó y notificó de nueva cuenta, una diligencia de acceso a la información clasificada, requiriendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, solicitara a su vez al Juzgado Sexto Militar, para que exhibiera ante este Órgano Garante, la averiguación previa actualmente inmersa en la causa penal número **338/14**, radicada en el juzgado de referencia.

En relatadas condiciones, se celebró la diligencia de acceso a la información clasificada, siendo omisa la dependencia en exhibir la averiguación previa solicitada; en este sentido el sujeto obligado, por una parte reiteró lo esgrimido en la primera diligencia de acceso a la información, y por otra, vertió las siguientes manifestaciones:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que el artículo 13 Constitucional otorga jurisdicción al fuero de guerra, por lo que los asuntos del orden militar señala la Corte Internacional, deben juzgarse por los Tribunales Militares competentes.
- Que la competencia de los Tribunales Militares para conocer de los citados delitos del orden militar se sustenta en los artículos 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 57 y 58 del *Código de Justicia Militar*.
- Que el artículo primero del *Código de Justicia Militar* refiere la organización militar, plasmándose además, quienes son los administradores de la Justicia Militar.
- Que de ejercitarse la acción penal, la averiguación previa se remite a los juzgados militares, quienes tienen la función de determinar si se actualizan los delitos correspondientes.
- Que el artículo 439 del *Código de Justicia Militar*, establece quienes son las partes que tienen acceso a la causa penal de mérito.
- Que las funciones del Supremo Tribunal Militar, y Consejos de Guerra ordinarios y extraordinarios, tienen sus funciones definidas en el Código de Justicia Militar.
- Que las funciones de los jueces militares, no se encuentran plasmadas dentro de ordenamientos de carácter administrativo, si no, dentro del *Código de Justicia Militar*.
- Que el Supremo Tribunal Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la facultad de revisar en segunda Instancia las decisiones de los Juzgados Militares, por lo que éstos y aquéllos no se encuentran vinculados de manera administrativa alguna.
- Que las resoluciones emitidas por el Juzgado Sexto Militar no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Que la *Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos* y el *Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional* establecen las funciones de las diversas unidades administrativas de la dependencia, siendo que la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

organización y funcionamiento de los Órganos del Fuero de Guerra y de los Juzgados Militares se encuentran establecido en el *Código de Justicia Militar*.

- Que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por lo que no podría juzgarse las mismas acciones dentro del fuero civil, y el militar.
- Que la averiguación previa de mérito, adquirió la calidad de **causa penal** desde el momento en que fue radicada en el Juzgado Sexto Militar; no existiendo la posibilidad de considerarlos como documentos aislados.
- Que el Juzgado Sexto Militar, instruyó la causa penal número **338/2014**, a personal militar por la comisión de los delitos de desobediencia e infracción de deberes, que son de competencia exclusiva del fuero de guerra, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 17, 20, 21, 113 y 133 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 57 del *Código De Justicia Militar*, y en acatamiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 17 de abril de 2015, sobre los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, mediante la cual se delimitó la jurisdicción militar para juzgar exclusivamente a personal militar, y con motivo de actos que tuvieran relación directa con la disciplina militar; encontrándose jurídicamente imposibilitado para exhibir cualquier documento agregado a la causa penal de referencia, ya que de otorgar los documentos de referencia, se violentaría el debido proceso, y se incurría en responsabilidad.
- Que las resoluciones del Juzgado Sexto Militar, son de naturaleza jurisdiccional y, por ende, autónomas e independientes a las que desde el punto de vista administrativo emite la secretaría de la defensa nacional.
- Que la reserva de la información invocada, tiene un sólido fundamento legal basado en la Constitución Federal, y en la ley general y federal de transparencia; que obligan a los tribunales militares a verificar el cumplimiento de las leyes, la persecución de los delitos y la impartición de la justicia imparcial y expedita, salvaguardando a la vez los derechos fundamentales de los procesados, a quienes la carta magna les consagra a su favor el principio de presunción de inocencia hasta en tanto no se les dicte sentencia condenatoria firme.
- Que no pueden tener acceso al expediente personas ajenas a los procesados, sus defensores y el agente del ministerio público militar.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que existe constancia de que los procesados han manifestado expresamente su oposición a la publicación de cualquier información contenida en la causa penal.
- Que cualquier requerimiento de consulta al expediente, debe ser solicitado oficial y directamente al Juez Sexto Militar, quien resolverá lo conducente conforme a la autonomía que le otorga el artículo 17 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.
- Que los artículos 301, 303 y 382 del *Código de Justicia Militar*, establecen la descripción de los elementos del cuerpo del delito.

En relatadas condiciones, el Comisionado Ponente, efectuó de manera directa un requerimiento al Juez Sexto Militar, a efecto de que se le otorgara acceso a la averiguación previa radicada en el Juzgado Sexto Militar, e inmersa en la causa penal número **338/14**.

En este sentido, se precisó al citado Juzgador la disposición de este Instituto, para acudir a las oficinas correspondientes, a efecto de contar con el acceso a la multicitada averiguación previa.

Al respecto, cabe señalar que el oficio descrito con anterioridad, fue hehco del conocimiento de la Unidad de Enlace del sujeto obligado.

En respuesta, el Juez Sexto Militar, señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 8, 13, 16 y 17 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 13 fracción V, 14 fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, 113 fracciones X y XI, de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, así como 439 del *Código de Justicia Militar*, ese Órgano Jurisdiccional daría vista a las partes sobre la pretensión de este Instituto de acceder a la supra citada averiguación previa, tomando en cuenta que la causa penal de mérito, actualmente se encuentra en fase de Instrucción.

En atención a lo antes expuesto, en la presente resolución se analizará el agravio formulado por el particular, en relación con la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por la *Ley Federal de*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.

Tercero. Una vez expuesto lo anterior, en el presente considerando se abordará el marco normativo que resulta aplicable a la estructura y atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en relación con la materia de la solicitud de mérito.

Ahora bien, el artículo 129 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* dispone lo siguiente:

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviere complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

De nuestra Carta Magna, puede advertirse que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales; sin embargo, **subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar;** pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.

Asimismo, se advierte que cuando en un delito o falta del orden militar estuviere complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil competente.

Aunado a lo anterior, se advierte claramente que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, y que solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Por su parte, la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*² prevé:

Artículo 29.- A la **Secretaría de la Defensa Nacional**, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea;

...

IV.- Manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional al Servicio de la Federación y los contingentes armados que no constituyan la guardia nacional de los Estados;

...

VI.- Planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra; formular y ejecutar, en su caso, los planes y órdenes necesarios para la defensa del país y dirigir y asesorar la defensa civil;

...

XIX.- Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo Federal, y

XX.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.”

Del cuerpo normativo que nos ocupa, se advierte que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional el despacho de diversos asuntos, entre los que se encuentran, organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea; manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional al Servicio de la Federación y los contingentes armados que no constituyan la guardia nacional de los Estados; planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra; formular y ejecutar, en su caso, los planes y órdenes necesarios para la defensa del país; prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo Federal y las demás que así lo señalen las leyes correspondientes.

Asimismo, la *Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos*³ establece:

Artículo 1. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

1. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

² http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110814.pdf

³ <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/169.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

II. Garantizar la seguridad interior;

...

Artículo 2. Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo, conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

Artículo 22. El Estado Mayor de la Defensa Nacional es el órgano técnico operativo, colaborador inmediato del Alto Mando, a quien auxilia en la Planeación y coordinación de los asuntos relacionados con la Defensa Nacional y con la organización, adiestramiento, operación y desarrollo de las Fuerzas Armadas de tierra y aire y transforma las decisiones en directivas, instrucciones y órdenes, verificando su cumplimiento.

A mayor abundamiento, la *Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos* señala que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen como misiones generales, defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior de la nación.

Por su parte, el *Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional*⁴ establece lo siguiente:

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente Reglamento, se establecen las definiciones siguientes:

...

IV. Ejército y Fuerza Aérea: el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

V. Estado Mayor: el Estado Mayor de la Defensa Nacional;

...

Artículo 7.- Para su funcionamiento, la Secretaría se integra con:

...

VIII. Órganos del Fuero de Guerra:

A. Supremo Tribunal Militar;

B. Procuraduría General de Justicia Militar, y

C. Cuerpo de Defensores de Oficio.

⁴ http://www.sedena.gob.mx/pdf/reglamentos/rglmto_int_sdn.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

...

ARTÍCULO 79.- La organización y funcionamiento de los Órganos del Fuero de Guerra se establecen en el Código de Justicia Militar, además de los reglamentos y manuales respectivos.

ARTÍCULO 80.- El Procurador General de Justicia Militar es el consultor jurídico de la Secretaría en asuntos de la competencia de la misma, y le corresponden las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el General Secretario los asuntos a su cargo;

...

IV bis. Representar al Presidente de la República en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aquellos asuntos que corresponda a la Secretaría de la Defensa Nacional representar al Titular del Ejecutivo Federal, en término del Segundo párrafo del artículo 19 de la citada Ley;

...

VII. Atender y dar seguimiento a las averiguaciones previas que, en su caso, se hayan generado con motivo de las quejas o recomendaciones que reciba cualquier autoridad de la Secretaría, emitidas por organismos de derechos humanos, cuando procedan legalmente, e

VIII. Intervenir en la elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes o decretos legislativos, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de competencia de la Secretaría.

Por su parte, el *Código de Justicia Militar* establece lo siguiente:

Artículo 1.- La administración de la justicia militar corresponde a:

I.- El Supremo Tribunal Militar;

II.- Los Consejos de Guerra Ordinarios;

III.- Los Consejos de Guerra Extraordinarios;

IV.- Los Jueces, y

V.- Los Jueces de Ejecución de Sentencia.

Artículo 24.- Los juzgados militares se compondrán de un juez, general brigadier de servicio, o auxiliar, un secretario, teniente coronel de servicio o auxiliar, un oficial mayor y los subalternos que sean necesarios.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Artículo 28. Habrá el número de jueces que sean necesarios para el servicio de justicia, con la jurisdicción que determine la Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículo 36.- El Ministerio Público es el único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, sino cuando lo estime procedente o por orden firmada por el Secretario de Guerra y Marina o por quien en su ausencia lo substituya; orden que podrá darse cuando así lo demande el interés social, oyendo, previamente, el parecer del Procurador General de Justicia Militar.

Artículo 37.- Toda denuncia o querrela, sobre delitos de la competencia de los tribunales militares, se presentará, precisamente, ante el Ministerio Público; y a éste harán la consignación respectiva, las autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal.

Quando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda que éste no atenta contra la disciplina militar, en términos del artículo 57 de este Código, inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad del Ministerio Público Militar deberá remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones, sin perjuicio de seguir actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos hechos.

Artículo 38.- Todas las personas que deban suministrar datos para la averiguación de los delitos, están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público, cuando sean citadas para ello por el Procurador General de Justicia Militar o sus agentes. Quedan exceptuados de esta regla, el Presidente de la República, los secretarios del despacho, los subsecretarios y oficiales mayores, los generales de división, los comandantes militares, los jefes de departamento y los miembros de un Tribunal Superior, a quienes se les examinará en sus respectivas oficinas. Los miembros del cuerpo diplomático serán examinados en la forma que indique la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 59.- La jurisdicción penal militar, no es prorrogable ni renunciable.

Artículo 60.- Cuando haya de juzgarse a un militar por delito de la competencia del fuero de guerra, encontrándose procesado por alguno del orden común o federal, la autoridad judicial militar instruirá la causa, como si el detenido se hallara a su disposición desde que dicte el auto de incoación, si tiene conocimiento del lugar en que el inculpado se halle detenido, y si no, desde el momento en que tal circunstancia le fuere sabida. En el caso que menciona este artículo, el juez militar librará oficio informativo al del orden común o federal.

Artículo 67.- Corresponde al Supremo Tribunal Militar conocer:

I.- De las competencias de jurisdicción que se susciten entre los jueces, y de las contiendas sobre acumulación;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

II.- De las excusas que sus miembros presenten para conocer de determinados negocios, así como de las de los jueces;

III.- De los recursos de su competencia;

IV.- De las causas de responsabilidad de los funcionarios de la administración de justicia militar;

V.- De las reclamaciones que se hagan contra las correcciones impuestas por los jueces y presidentes de consejo de guerra, confirmando, revocando o modificando dichas correcciones;

Artículo 76.- Corresponde al juez de la causa:

I.- Instruir los procesos de la competencia de los consejos de guerra, así como los de la propia; dictando al efecto las órdenes de incoación;

II.- Juzgar los delitos penados con prisión que no exceda de un año, como término medio, con suspensión o con destitución. Cuando concurren diversas penas, la competencia se determinará por la pena privativa de libertad;

...

IV.- Comunicar al Supremo Tribunal Militar las irregularidades que adviertan en la administración de justicia;

...

X.- Las demás atribuciones que determinen las leyes y reglamentos.

Artículo 81.- El Procurador General de Justicia Militar, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

...

II.- Ordenar a los agentes la formación de averiguaciones previas, sobre hechos que estime pudieran dar como resultado el esclarecimiento de que se ha cometido un delito de la competencia de los tribunales del fuero de guerra;

III.- Perseguir por sí mismo o por medio de sus agentes, ante los tribunales del fuero de guerra, los delitos contra la disciplina militar, solicitando las órdenes de aprehensión en contra de los inculcados, buscando y presentando las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, cuidando de que los juicios se sigan con regularidad, pidiendo la aplicación de las penas que corresponda. Promoviendo lo conducente para que éstas sean debidamente cumplidas;

IV.- Pedir instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, en los casos en que por su importancia así se requiera, emitiendo las consideraciones y opinión que juzgue procedentes;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

V.- Rendir los informes que las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, así como el Supremo Tribunal Militar le soliciten;

...

Artículo 301.- Comete el delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla.
Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior, para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado, para la fuerza de que dependa o que tuviese a sus órdenes.

Artículo 382.- El que infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, y el hecho u omisión no constituyere un delito especialmente previsto por este Código, será castigado con la pena de un año de prisión. Cuando la infracción sea debida a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses de prisión.

Artículo 616.- La instrucción se practicará a la brevedad posible, a fin de que el procesado sea juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.

Artículo 617.- Cuando el juez creyere concluida la instrucción, ordenará que se ponga la causa a la vista de las partes, sucesivamente, por el término de tres días para que promuevan las diligencias que a su derecho convengan y que puedan practicarse dentro de quince días.

Artículo 618.- Transcurridos o renunciados los plazos a que se refiere el artículo anterior, o si no se hubiere promovido prueba, el juez declarará cerrada la instrucción y mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público y de la defensa, sucesivamente, para que en el término improrrogable de cinco días para cada uno, formulen sus conclusiones. Si el expediente excediere de cien hojas, por cada cuarenta de exceso o fracción, se aumentará un día más al término señalado.

Artículo 619.- Cuando algún defensor no formule conclusiones dentro del término del traslado, el juez lo hará constar en el proceso y declarará que aquéllas son de inculpabilidad.

Artículo 620.- La defensa cuando no esté representada por defensor de oficio letrado, puede, al presentar sus conclusiones por escrito, no sujetarse a ninguna regla especial.

Artículo 621.- Cuando el Ministerio Público no formule acusación, el juez remitirá el proceso al Procurador General para que exprese, dentro del término de diez días, si confirma el pedimento, o lo modifica ordenando acusar.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Cuando el Ministerio Público al formular conclusiones, no comprendiere en ellas algún delito que resulte probado de la instrucción u omitiere alguna circunstancia que pudiese atenuar, agravar o modificar notablemente la penalidad, el juez al pronunciar sentencia definitiva hará notar en ella esas circunstancias y lo comunicará al Procurador General para los efectos legales que correspondan.

Artículo 622.- Si el pedimento del Procurador fuere de no acusación, el juez, al recibir aquél, dictará auto de sobreseimiento en el asunto y ordenará la inmediata libertad del procesado, mandando archivar el expediente.

El mencionado auto producirá los mismos efectos que una sentencia absolutoria.

Artículo 623.- Si las conclusiones del Ministerio Público fueren acusatorias y el delito de la competencia del juez, fenecido el plazo para que la defensa presente las suyas, se citará a una audiencia dentro de tercero día, la que se verificará concurran o no las partes. Estas podrán alegar en la audiencia, lo que a su derecho convenga.

Artículo 624.- La citación para la audiencia produce efectos de citación para sentencia y el juez fallará dentro de los ocho días siguientes.

Del cuerpo normativo que nos ocupa, se advierte que **la administración de justicia militar le corresponde al Supremo Tribunal Militar, los Consejos de Guerra Ordinarios, los Consejos de Guerra Extraordinarios, los Jueces y los Jueces de ejecución de sentencia.**

En congruencia con lo anterior, los juzgados militares se componen de un juez, un secretario, un oficial mayor y los subalternos que sean necesarios.

Asimismo, el Ministerio Público Militar es el único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, si no cuando lo estime procedente, o bien por orden firmada por el Secretario de Guerra y Marina.

En este sentido, **toda denuncia o querrela sobre delitos de la competencia de los tribunales militares deberá presentarse, precisamente, ante el Ministerio Público Militar,** y a esta autoridad se harán las consignaciones respectivas, las autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal.

A mayor abundamiento, resulta de gran importancia señalar que **cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda que éste no atenta contra la disciplina militar, en términos del artículo 57 de este Código; inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad, el Ministerio Público Militar deberá remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones, sin perjuicio**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

de seguir actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos hechos.

En congruencia con lo anterior, todas las personas que deban suministrar datos para la averiguación de los delitos están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público, cuando así sean requeridas para ello por el Procurador General de Justicia Militar.

A mayor abundamiento, pudo colegirse que **la jurisdicción penal militar, no es prorrogable ni renunciable.**

No obstante lo anterior, el cuerpo normativo que nos ocupa, también señala que cuando haya de juzgarse a un militar por delito de la competencia del fuero de guerra, encontrándose procesado por alguno del orden común o federal, **la autoridad judicial militar instruirá la causa, como si el detenido se hallara a su disposición desde que dicte el auto de incoación,** si tiene conocimiento del lugar en que el inculcado se halle detenido, y si no, desde el momento en que tal circunstancia le fuere sabida. En este caso, el juez militar librará oficio informativo al del orden común o federal.

Por su parte, el **Supremo Tribunal Militar** conoce de las competencias de jurisdicción que se susciten entre los jueces, y de las contiendas sobre acumulación; las excusas los magistrados y jueces presenten para conocer de determinado negocio; los recursos de incompetencia; las causas de responsabilidad de los funcionarios de la administración de justicia militar, y las reclamaciones que se hagan contra las correcciones impuestas por los jueces y presidentes de Consejo de Guerra.

En adición a lo anterior, el *Código de Justicia Militar* señala que **corresponde al juez de la causa**, ejercitar las siguientes atribuciones:

- **Instruir los procesos de la competencia de los Consejos de Guerra, así como los de la propia; dictando al efecto las órdenes de incoación;**
- Juzgar los delitos penados con prisión que no exceda de un año, como término medio, con suspensión o con destitución. Cuando concurren diversas penas, la competencia se determinará por la pena privativa de libertad;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Comunicar al Supremo Tribunal Militar las irregularidades que adviertan en la administración de justicia; y,
- Las demás atribuciones que determinen las leyes y reglamentos.

Por su parte, el **Procurador General de Justicia Militar** tiene, entre sus atribuciones y deberes, las siguientes:

- Ordenar a los agentes la formación de averiguaciones previas, sobre hechos que estime pudieran dar como resultado el esclarecimiento de que se ha cometido un delito de la competencia de los tribunales del fuero de guerra;
- Perseguir por sí mismo o por medio de sus agentes, ante los tribunales del fuero de guerra, los delitos contra la disciplina militar;
- Pedir instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, en los casos en que por su importancia así se requiera; y,
- Rendir los informes que las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, así como el Supremo Tribunal Militar le soliciten.

En suma de lo anterior, del *Código de Justicia Militar* que nos ocupa, se desprende que **el delito de desobediencia**, lo comete aquel militar que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla.

Asimismo, **el delito de infracción militar** lo define el citado Código, como el hecho de que alguien infrinja alguno de sus deberes militares que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada.

A mayor abundamiento, del cuerpo legal que nos ocupa, pudo advertirse que la instrucción deberá practicarse a la brevedad posible a fin de que el procesado sea juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo.

En adición a lo anterior, cuando el juez creyere concluida la instrucción, ordenará que se ponga la causa a la vista de las partes, por el término de tres días para que promuevan las diligencias que a su derecho convengan; posterior a ello el juez



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

declarará cerrada la instrucción y mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público y de la defensa, a efecto de que en el término de cinco días para cada una de las partes, formulen sus conclusiones; si algún defensor no formula las conclusiones dentro del término del traslado, el juez lo hará constar en el proceso y declarará que aquéllas son de inculpabilidad.

En adición a lo anterior, también se advierte que cuando el Ministerio Público no formule acusación, el juez remitirá el proceso al Procurador General para que exprese, dentro del término de diez días, si confirma el pedimento, o lo modifica ordenando acusar.

Ahora bien, si el pedimento del Procurador fuere de no acusación, el juez, al recibir aquél, dictará auto de sobreseimiento en el asunto y ordenará la inmediata libertad del procesado

En caso de que las conclusiones del Ministerio Público fueren acusatorias y el delito de la competencia del juez, fenecido el plazo para que la defensa presente las suyas, se citará a una audiencia dentro del tercer día, verificándose esta, concurran o no las partes. En sentido las partes podrán alegar en la audiencia, lo que a su derecho convenga.

Finalmente se establece que la citación para la audiencia produce efectos de citación para sentencia y el juez fallará dentro de los ocho días siguientes.

Ahora bien, dada la naturaleza de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, resulta necesario establecer lo que al efecto señala el marco jurídico, que rige a la Procuraduría General de la República, en materia de averiguaciones previas de naturaleza civil.

Al respecto, la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* señala lo siguiente:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

...



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

...

Artículo 102.

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. **El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.** Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculcados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

...

Del cuerpo jurídico de referencia, se establece que la investigación y persecución de los delitos federales corresponde al Ministerio Público de la Federación, el cual será el encargado de ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes.

Por otro lado, en la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*,⁵ se dispone:

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

⁵ Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPGR.pdf>.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Artículo 2. Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación.

...

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

...

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales. en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

...

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

...

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

...

h) Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;

...

n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

ñ) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;

...

r) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables;

s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;
2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;
3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;
4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;
5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y
6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;

B) Ante los órganos jurisdiccionales:

a) Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querrela, esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia.

Quando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se ejercitará ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito;

...

c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley;

...

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación;

...



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

e) Solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, para acreditar el delito y la responsabilidad del inculpado, de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;

De lo anterior, se desprende que la Procuraduría General de la República estará a cargo del Procurador General de la República, quién dirige al Ministerio Público de la Federación, al que le corresponde la investigación y persecución de los delitos del orden federal.

Ahora bien, **dentro de la averiguación previa, le corresponde al Ministerio Público de la Federación,** entre otras funciones las siguientes:

- Practicar todas aquellas diligencias que sean necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado **en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales,** en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres ámbitos de gobierno.
- Obtener elementos probatorios, solicitar a particulares su aportación voluntaria, y cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención.
- Realizar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.
- Solicitar al órgano jurisdiccional órdenes de cateo, imposición del arraigo, prohibición de abandonar una demarcación geográfica y otras medidas cautelares.
- Practicar las diligencias de cateo.
- Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables.
- Determinar el no ejercicio de la acción penal cuando los hechos de que



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

conozca no sean constitutivos de delito alguno; cuando desahogadas las diligencias y medios de prueba no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado; la acción penal se hubiese extinguido; se advierta una causa de exclusión del delito y resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito.

Asimismo, la Procuraduría General de República tiene el deber de ejercer la acción penal ante los órganos jurisdiccionales cuando exista denuncia o querrela, siempre que se haya acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien o quienes hubieran intervenido, solicitando ordenes de aprehensión o de comparecencia; poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley; **aportar pruebas y promover diligencias para la debida comprobación de la existencia del delito**, las circunstancias en que se hubiese cometido; así como solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio cuando para ello sea necesario la intervención de la autoridad judicial, con el fin de acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del indiciado.

Por su parte el *Código Penal Federal*⁶, establece lo siguiente:

Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

Artículo 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.

De lo antes expuesto, se advierte que el delito se encuentra definido por la propia ley, como el **acto u omisión que sancionan las leyes penales**, y comete el acto de homicidio aquel que priva de la vida a otra persona.

Cuarto. Con la finalidad de tener mayores elementos que nos permitan resolver el caso en cuestión, este Instituto se dio a la tarea de realizar una búsqueda de información pública, arrojándose los siguientes elementos de convicción:

⁶ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_120315.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Al efecto, el boletín de prensa número **175/14⁷**, emitido por la Procuraduría General de la República en relación con el tema que nos ocupa, señala lo siguiente:

JESÚS MURILLO KARAM, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (JMK):
Como podrán ustedes imaginar, vamos a hablar en relación a los hechos sucedidos el 30 de junio del presente año en el poblado de San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, desde prácticamente el principio iniciaron una serie de investigaciones en razón de que la propia Secretaría de la Defensa había detectado algunas inconsistencias en cuanto a la aplicación de los protocolos de actuación: una sola camioneta en lugar de dos, un grupo reducido.

Iniciamos en consecuencia, a partir de entonces, una investigación que después al poco tiempo, en razón de los datos recabados, se convirtió en averiguación previa para estudiar y analizar las inconsistencias que entonces veíamos y los hechos que hoy podemos plantear.

Realizamos una serie de pruebas periciales; hemos hecho una serie de diligencias y de interrogatorios en los que nos queda claro que en un primer momento, efectivamente, como lo señalan prácticamente todos los participantes que pueden declarar, **hubo un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de delincuentes**, hoy podemos decirlo con toda claridad, que se encontraban al interior de la bodega, el cual duró aproximadamente de ocho a 10 minutos.

Sin embargo, al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres de los elementos militares, uno se quedó afuera porque estaba herido, el Teniente porque lo estaba asistiendo, el chofer, porque él lo era, y los otros tres entraron y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna.

Ante ello, quiero decirles que la Procuraduría General de la República, ha tomado la determinación de culminar la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que hemos podido detectar, independientemente de que ya la Secretaría de la Defensa les está siguiendo los proceso militares que corresponden a los ocho por el desacato, las fallas a la Ley Militar, a la de disciplina y desobediencia.

Independientemente de esas, la Procuraduría General de la República el día de mañana presentará acusación y solicitud de orden de aprehensión al juez para que se les juzgue a estos tres por homicidio y a los otros por las razones que pudieran



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

aparecer tanto en el Código Militar, como las que nos dé el Código Penal en razón de su actividad.

Esta información la quisimos señalar con toda claridad, porque **los ocho participantes están detenidos en las instalaciones militares correspondientes y en consecuencia podemos hablar de una averiguación que está culminando y que estaremos consignando cuando tengamos completos todos los periciales, pero que con lo que ya tenemos, tenemos suficiente para poder determinar el exceso de la fuerza y la tipificación del delito de homicidio, esto es creo que suficiente y claro.**

De lo anterior, se advierte que en relación a los hechos sucedidos el 30 de junio del 2014 en el poblado de San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, la **Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República**, desde prácticamente el principio, iniciaron una serie de **investigaciones**, en razón de que la propia Secretaría de la Defensa había detectado algunas **inconsistencias en cuanto a la aplicación de los protocolos de actuación**.

En consecuencia, la Procuraduría General de la República inició una investigación que al poco tiempo, en razón de los datos recabados, se convirtió en averiguación previa.

La Procuraduría General de la República tomó la determinación de **culminar la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon**, según las pruebas periciales que pudieron detectar, **independientemente de que ya la Secretaría de la Defensa les está siguiendo los proceso militares que corresponden a los ocho por el desacato, las fallas a la Ley Militar, a la de disciplina y desobediencia.**

Ahora bien, en relación con la Recomendación número **51/2014⁸** emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conviene destacar lo siguiente:

**GENERAL SECRETARIO SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA
SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

**LIC. JESÚS MURILLO KARAM
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

⁸ Visible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2014/REC_2014_051.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

**DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

Distinguidos señores:

1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1o., párrafos primero, segundo y tercero y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o., primer párrafo, 6o., fracciones I, II y III, 15, fracción VII, 24, fracción IV, 42, 44, 46 y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 136 de su reglamento interno, ha examinado los elementos de evidencia contenidos en el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, derivado de la queja iniciada de oficio por el Presidente de este Organismo Nacional para investigar los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

I. HECHOS

3. El 30 de junio de 2014, los diversos medios de comunicación hicieron públicos los hechos ocurridos la madrugada de ese día en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en los cuales un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional privó de la vida a 22 personas, entre ellas una adolescente de 15 años, después de un enfrentamiento registrado entre un grupo de civiles y los elementos militares. Las primeras noticias reportaban que los civiles pertenecían a un grupo de presuntos delincuentes, quienes se encontraban adentro de una bodega, y que en ese lugar se había rescatado a tres mujeres secuestradas. Fue hasta el 9 de julio cuando algunos medios de comunicación reportaron que podía tratarse de una privación arbitraria de la vida.

4. Con motivo de lo anterior y a fin de investigar los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos, el Presidente de esta Comisión Nacional, con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., primer párrafo y 6o., fracción II de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 89 del Reglamento Interno, **inició de oficio la investigación que da origen a la presente Recomendación, integrándose el expediente CNDH/2/2014/5390/Q**, y Visitadores adjuntos de esta institución realizaron diversos trabajos a fin de documentar las violaciones de los derechos humanos, recopilar información, testimonios, fotografías y demás evidencias. Asimismo, se solicitaron informes a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado de México, a la Presidencia Municipal de Tlatlaya, Estado de México, y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, cuya valoración lógico jurídica es objeto de análisis en el capítulo de Observaciones de esta Recomendación.

II. EVIDENCIAS

A. Comisiones, trabajo de campo y valoraciones periciales:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

15. Acta circunstanciada de 1 de agosto de 2014, que da cuenta de la visita realizada a la **Procuraduría General de Justicia del Estado de México**, sede Toluca, Estado de México para obtener información respecto de la **carpeta de investigación que en su momento tramitó dicha Procuraduría**.

16. Acta circunstanciada de 2 de agosto de 2014, en la que consta la visita realizada a la **Fiscalía Especializada de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México**, ubicada en el Centro Estatal de Justicia, en el municipio de Lerma, en donde personal de este Organismo Nacional entrevistó a **AR10**, quien participó en el levantamiento de los **22 cadáveres de las personas que fallecieron en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México**.

B. Informes y diligencias practicadas con autoridades responsables o en colaboración:

...

49. Acta circunstanciada de 6 de agosto de 2014, en la que se hace constar que personal de este organismo nacional, en brigada de trabajo sostenida con la Procuraduría General de la República, solicitó apoyo para **consultar la averiguación previa 1**, iniciada con motivo de la remisión de la carpeta de investigación 1.

53. Correo electrónico recibido el 15 de agosto de 2014, por medio del cual personal de la **Procuraduría General de la República** remite el oficio SEIDO/UEITA/10269/2014 en el cual una agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciones de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República **informa sobre el estado de la averiguación previa 1**.

57. Acta circunstanciada de 22 de septiembre de 2014, en la que consta que el 18 del mismo mes y año citados estando constituidos en las oficinas de la Dirección Jurídica del Centro Federal Femenil "Noroeste" en Tepic, Nayarit, la titular de dicha dirección entregó:

...

57.2. Oficio 8391/2014 suscrito por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el 14 de agosto de 2014, en el cual se plasman los resolutivos del **auto de formal prisión** dictado por el juez de Distrito adscrito a dicho juzgado **en contra de V24 y V25**, por los delitos de acopio de armas, posesión de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, dictado en la causa penal 1 en la misma fecha.

...

60. Oficio DH-III-10983 recibido el 2 de octubre de 2014 en este organismo nacional, por medio del cual el **director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional** remite el informe solicitado, al cual anexa el diverso correo



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional**
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
**Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

electrónico de imágenes S-1/M-1/23011 de 23 de septiembre de 2014, **por parte de la Comandancia de la 22/A. Zona Militar (Santa María Rayón, México).**

62. Oficio 213601000/2620/2014, recibido en este organismo el 2 de octubre de 2014, por medio del cual **una agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia con sede en Toluca**, por instrucciones del Procurador General de Justicia del Estado de México, rinde el informe solicitado, y remite los siguientes:

62.1. Oficio 21338A000/IV/664/14 de 1 de octubre de 2014, suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cuatro de la Procuraduría General de Justicia.

65. Oficio DH-II-11127, recibido en este organismo nacional el 6 de octubre de 2014, suscrito por la subdirectora de Asuntos Nacionales de la Dirección General de Derechos Humanos de la **Secretaría de la Defensa Nacional**, mediante el cual rinde el **informe solicitado** y adjunta el diverso DH-III-11116, de 3 de agosto, por el cual se requiere al Juez 6/o. Militar y al Procurador General de Justicia Militar, información relacionada a los hechos materia de la queja.

...

IV. OBSERVACIONES

...

111. Asimismo, se visitaron las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en siete ocasiones, y en 18 ocasiones las de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, transcribiendo más de 176 diligencias ministeriales y constancias que obran en la carpeta de investigación 1 y las averiguaciones previas 1, 2, y 3. Además, se tuvieron a la vista los vehículos de los civiles que estuvieron al interior de la bodega, así como el vehículo militar; por último, **se tuvo acceso a 1,676 fotografías recabadas por personal ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que participó en las diligencias ministeriales relacionadas con el levantamiento de cadáveres y la realización de las necropsias.**

113. Debe mencionarse que este Organismo Nacional tuvo acceso a las carpetas de investigación y averiguaciones previas iniciadas en las procuradurías correspondientes del fuero civil, quienes pusieron a la vista de este Organismo Nacional las constancias requeridas. Asimismo, reconocerse la colaboración por parte de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien accedió a que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entrevistara a los elementos militares que intervinieron en los hechos, dentro de la Prisión Militar en la que se encuentran reclusos.

117. Los hechos que dan motivo a la presente recomendación, ocurrieron en la localidad de Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

en el Estado de México, la madrugada del 30 de junio de 2014, lugar que por su cercanía a otros municipios, como Tlalchapa, Tlapehuala, Apaxtla de Castrejón y Arcelia, todos en el estado de Guerrero, tiene fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada. En este lugar, **22 personas perdieron la vida**, siendo el caso que cuatro de ellos (V6, V9, V19 y V20) presumiblemente fueron heridos a causa del enfrentamiento librado con elementos del ejército mexicano, tres personas (V7, V8, y V21) fueron heridas presumiblemente en medio del intercambio de disparos, o bien, en un contexto de fuego cruzado y 12 personas fueron presumiblemente privadas arbitrariamente de su vida por personal militar, incluyendo dos adolescentes (V1, V2, V3, V4, V5, V10, V14, V15, V16, V17, V18 y V22). Por lo que hace a las víctimas V11, V12 y V13 no es posible establecer ubicaciones y posiciones originales, debido a que fueron movidos de su ubicación, circunstancia que hace presumir que fueron privados de la vida de manera arbitraria.

118. Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este Organismo Nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de V24 y V25, y los tratos inhumanos en agravio de V23, mujeres que estuvieron presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación 1; hechos sobre los cuales se hará el pronunciamiento respectivo en la presente recomendación.

129. Ahora bien, respecto a la forma en la que ocurrieron los hechos, mediante oficio DH-III-10983, al cual se anexa el diverso correo electrónico de imágenes S-1/M-1/23011 de 23 de septiembre de 2014, por parte de la Comandancia de la 22/A. Zona Militar (Santa María Rayón, México) recibido en este Organismo Nacional el 2 de octubre de 2014, suscrito por el director general de Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el 30 de junio de 2014, en atención al correo electrónico de imágenes referido, aproximadamente a las 5:00 horas, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, pertenecientes al 102/o. Batallón de infantería, efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial, en el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, México, sobre la carretera Federal Número 2.

130. Estando en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Estado de México, al pasar frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas ni bardas de acceso, el sargento segundo de infantería AR2, observó por la luz de los faros del vehículo militar, que había una persona armada proporcionando seguridad a dicha instalación, así como tres camionetas en su interior, informando de ello inmediatamente a sus compañeros, por lo que el vehículo militar detuvo su marcha y al tratar de circular en reversa, se inició una agresión con disparos de armas de fuego en contra del personal militar provenientes del interior de la bodega, generándose una agresión por lo que personal militar la repelió, dirigiendo sus disparos hacia el lugar de donde provenían los flamazos de las armas de sus agresores sin que fuera posible distinguir a éstos debido a la oscuridad del lugar,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

iniciándose el fuego cruzado, lo que originó que AR8, soldado de sanidad, resultara herido.

131. En el informe de mérito se precisó que al no escuchar más disparos y observar nulos movimientos en el interior de citado inmueble, refiere el informe, se procedió adoptando al máximo las medidas de seguridad, a realizar un reconocimiento en el interior del mismo, percatándose en ese momento el personal militar que en el lugar se encontraban sin vida una joven y 21 personas más. Asimismo, se encontró a tres personas del sexo femenino, quienes dijeron llamarse V23, V24 y V25 y pedían auxilio manifestando que se encontraban secuestradas, por lo que el personal militar procedió a brindarles seguridad, por temor a que hubiera más agresores.

De la **Recomendación número 51/2014**, es posible advertir que existen diversas “evidencias” consistentes en informes emitidos por la Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Particularmente, en el apartado “IV. Observaciones” se refiere que respecto a la **forma en la que ocurrieron los hechos el 30 de junio de 2014** en el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, México, sobre la carretera Federal Número 2, pero de manera específica el numeral 118, señala a los hechos acaecidos como violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar.

Al respecto, cabe indicar que la información oficial emitida por la Procuraduría General de la República y la Recomendación número **51/2014**, de la Comisión Nacional de derecho Humanos tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 89 del Reglamento de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, 79 y 129 del *Código Federal de Procedimientos Civiles*, de aplicación supletoria a la *Ley Federal de Procedimiento Administrativo*, a su vez supletoria de la Ley de la materia, en virtud de que fueron documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones.

Quinto. En el presente considerando, se analizará si resulta fundado el agravio del particular, respecto de la clasificación de la información solicitada, manifestada por la Secretaría de la Defensa Nacional, **con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.**

En este orden de ideas, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

la solicitud de información, la respuesta del sujeto obligado, el agravio formulado por el recurrente y las demás actuaciones efectuadas en la secuela procedimental.

El ahora recurrente solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional copia electrónica de la versión pública de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares presuntamente cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el que están involucrados elementos de fuerzas federales, en los hechos ocurridos el 30 de junio del año 2014.

Aunado a lo anterior, el particular vertió las siguientes consideraciones:

- Que el artículo 14 último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, prevé que no podrá invocarse el carácter de reservado de la información, cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de que la averiguación previa correspondiente, siga abierta.
- Que el Instituto Nacional de Migración entregó información que integraba la averiguación previa por el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, al considerar el propio instituto que los hechos contenidos en esa averiguación previa eran constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de que la averiguación seguía abierta.
- Que lo ocurrido en Tlatlaya se perfila como una ejecución extrajudicial, lo que contraviene los tratados internacionales sobre derechos humanos que a firmado el Estado Mexicano.
- Que la *Ley General de Víctimas* establece que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, sobre todo cuando hablamos de hechos que son considerados como graves violaciones a los derechos humanos.

En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Supremo Tribunal Militar, señaló al recurrente que la información solicitada se encontraba reservada, por un período de 12 años, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, en virtud de que se trata de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado, y la casusa penal que se instruye, es exclusivamente por delitos del orden militar.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Asimismo, precisó que los delitos que se le imputan al personal militar son para el oficial, **desobediencia e infracción de deberes militares** correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, y al personal de tropa por infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, de conformidad con los artículos 301 y 382 del *Código de Justicia Militar*.

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado anexó la resolución signada por los miembros del Comité de Información, mediante la cual **confirmó y declaró formalmente la reserva** de la información solicitada por el particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, en vía de alegatos, el sujeto obligado, a través del Comité de Información, manifestó lo siguiente:

- Que se atendió cabalmente la solicitud de acceso a la información del particular, al señalarle que de conformidad con el artículo 14 fracción IV, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, la misma se encontraba clasificada como **reservada**, por tratarse de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado.
- Que aunado a lo anterior, la causa penal militar que actualmente se instruye en los tribunales militares, es por la probable responsabilidad en la comisión de delitos por desobediencia e infracción de deberes militares a un Teniente, y por infracción de deberes militares al personal de tropa según su comisión o empleo, de conformidad con los artículos 301 y 382 del *Código de Justicia Militar*; ilícitos que en ningún ordenamiento legal están considerados como constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos como equivocadamente lo indica el recurrente.
- Que se ratifica que la indicada causa penal se encuentra en **etapa de instrucción** y que la Ley de la materia prevé la reserva hasta en tanto no se pronuncie una sentencia definitiva y que la misma haya causado ejecutoria.
- Que al tratarse de delitos del ámbito castrense que no violan los derechos humanos, se encuentra apegada a derecho la **reserva** invocada por esa Secretaría de Estado; ya que, de lo contrario, se violentaría el derecho de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

los imputados a una defensa adecuada y el principio de presunción de inocencia.

A mayor abundamiento, este Instituto acordó una diligencia de acceso a la información reservada, misma que fue debidamente notificada al sujeto obligado.

En congruencia con lo anterior, durante el desahogo de la diligencia de mérito, la Secretaría de la Defensa Nacional vertió las siguientes manifestaciones:

- Que la averiguación previa iniciada en contra del personal militar, se impetró por delitos del orden castrense, tales como desobediencia e infracción de deberes militares, acontecidos el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México.
- Que la competencia de los Tribunales Militares para conocer de los citados delitos del orden militar se sustentan en los artículos 13 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, y 57 y 58 del *Código de Justicia Militar*.
- Que la Averiguación Previa de mérito ya fue consignada, y **actualmente tiene la naturaleza de causa penal**, y se encuentra radicada en su totalidad, en original, en el Juzgado Sexto Militar, bajo el número de partida 338/14, cuya etapa procesal es la instrucción, existiendo pruebas pendientes por desahogarse; por lo que la misma, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se encuentra reservada.
- **Que el bien jurídico que tutelan los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar**, por los que están siendo procesados el personal militar, dentro de la causa penal 338/14, **es la disciplina militar**, por la probable comisión de los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares correspondientes a cada militar, según su comisión o empleo.
- Que los hechos constitutivos de probables violaciones a derechos humanos no son materia de la causa penal 338/14, puesto que en ésta, se investiga la comisión de conductas probablemente constitutivas de delitos previstos en el *Código de Justicia Militar*.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que las únicas personas que pueden tener acceso a la causa penal son las partes; de lo contrario, se vería afectado el derecho al debido proceso, toda vez que aún no se ha emitido la sentencia definitiva en el presente asunto.
- Que debido a la naturaleza de la documental clasificada, no se presentó la misma en el local del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Derivado de lo antes expuesto, se determinó efectuar un requerimiento de información adicional a la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual se le solicitó remitiera a este Instituto, el oficio por conducto del cual la Procuraduría General de Justicia Militar envió el pliego de consignación correspondiente, al Supremo Tribunal Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado de la averiguación previa iniciada en contra de personal militar por delitos del orden castrense, y relacionada con los hechos ocurridos en Tlatlaya Estado de México, el 30 de junio de 2014; en este sentido, también se le solicitó que efectuara las manifestaciones que estimara pertinentes a efecto de resolver lo que en derecho procediera.

En respuesta al requerimiento de información adicional de referencia, el sujeto obligado manifestó que en ningún caso, se remite pliego de consignación alguno al Supremo Tribunal Militar; por lo que precisó que el pedimento correspondiente es remitido por la Procuraduría General de Justicia Militar, a los Juzgados Militares, por conducto de la Comandancia de la I Región Militar.

Así las cosas, y en congruencia con lo anterior, precisó que el oficio solicitado es inexistente; sin embargo, aludió a la existencia de un diverso oficio mediante el cual la referida Región Militar, remitió al Juzgado 6° Militar, el pedimento correspondiente en contra de personal militar por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos del orden castrense, con motivo de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

En suma de las manifestaciones antes referidas, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el oficio aludido corre agregado a la causa penal respectiva, motivo por el cual la Procuraduría General de Justicia Militar y el Supremo Tribunal Militar, e incluso el Juez de la Causa, se encuentran legalmente impedidos para proporcionar cualquier documentación e información que obre dentro del expediente judicial de mérito.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Derivado de lo anterior, este Instituto acordó y notificó de nueva cuenta, una diligencia de acceso a la información clasificada, requiriendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, solicitara a su vez al Juzgado Sexto Militar, para que exhibiera ante este Órgano Garante, la averiguación previa actualmente inmersa en la causa penal número **338/14**, radicada en el juzgado de referencia.

En relatadas condiciones, se celebró la diligencia de acceso a la información clasificada, siendo omisa la dependencia en exhibir la averiguación previa solicitada; en este sentido el sujeto obligado, por una parte reiteró lo esgrimido en la primera diligencia de acceso a la información, y por otra, vertió las siguientes manifestaciones:

- Que la competencia de los Tribunales Militares para conocer de los citados delitos del orden militar se sustenta en los artículos 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 57 y 58 del Código de Justicia Militar.
- Que el artículo primero del *Código de Justicia Militar* refiere la organización militar, plasmándose además, quienes son los administradores de la Justicia Militar.
- Que de ejercitarse la acción penal, la averiguación previa se remite a los juzgados militares, quienes tienen la función de determinar si se actualizan los delitos correspondientes.
- Que el artículo 439 del *Código de Justicia Militar*, establece quienes son las partes que tienen acceso a la causa penal de mérito.
- Que las funciones del Supremo Tribunal Militar, y Consejos de Guerra ordinarios y extraordinarios, tienen sus funciones definidas en el *Código de Justicia Militar*.
- Que las funciones de los jueces militares, no se encuentran plasmadas dentro de ordenamientos de carácter administrativo, si no, dentro del *Código de Justicia Militar*.
- Que el Supremo Tribunal Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la facultad de revisar en segunda Instancia las decisiones de los Juzgados



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Militares, por lo que éstos y aquéllos no se encuentran vinculados de manera administrativa alguna.

- Que las resoluciones emitidas por el Juzgado Sexto Militar no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Que la *Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos* y el *Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional* establecen las funciones de las diversas unidades administrativas de la dependencia, siendo que la organización y funcionamiento de los Órganos del Fuero de Guerra y de los Juzgados Militares se encuentran establecido en el *Código de Justicia Militar*.
- Que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por lo que no podría juzgarse las mismas acciones dentro del fuero civil, y el militar.
- Que la averiguación previa de mérito, adquirió la calidad de **causa penal** desde el momento en que fue radicada en el Juzgado Sexto Militar; no existiendo la posibilidad de considerarlos como documentos aislados.
- Que el Juzgado Sexto Militar, instruyó la causa penal número **338/2014**, a personal militar por la comisión de los delitos de desobediencia e infracción de deberes, que son de competencia exclusiva del fuero de guerra, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 17, 20, 21, 113 y 133 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 57 del *Código De Justicia Militar*, y en acatamiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 17 de abril de 2015, sobre los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, mediante la cual se delimitó la jurisdicción militar para juzgar exclusivamente a personal militar, y con motivo de actos que tuvieran relación directa con la disciplina militar; encontrándose jurídicamente imposibilitado para exhibir cualquier documento agregado a la causa penal de referencia, ya que de otorgar los documentos de referencia, se violentaría el debido proceso, y se incurría en responsabilidad.
- Que las resoluciones del Juzgado Sexto Militar, son de naturaleza jurisdiccional y, por ende, autónomas e independientes a las que desde el punto de vista administrativo emite la secretaría de la defensa nacional.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que deben salvaguardarse los derechos fundamentales de los procesados, a quienes la carta magna les consagra a su favor el principio de presunción de inocencia hasta en tanto no se les dicte sentencia condenatoria firme.
- Que existe constancia de que los procesados han manifestado expresamente su oposición a la publicación de cualquier información contenida en la causa penal.
- Que cualquier requerimiento de consulta al expediente, debe ser solicitado oficial y directamente al Juez Sexto Militar, quien resolverá lo conducente conforme a la autonomía que le otorga el artículo 17 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.
- Que los artículos 301, 303 y 382 del *Código de Justicia Militar*, establecen la descripción de los elementos del cuerpo del delito.

En relatadas condiciones, el Comisionado Ponente, efectuó de manera directa un requerimiento al Juez Sexto Militar, a efecto de que se le otorgara acceso a la averiguación previa radicada en el Juzgado Sexto Militar, e inmersa en la causa penal número **338/14**.

En respuesta, el Juez Sexto Militar, señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 8, 13, 16 y 17 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 13 fracción V, 14 fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, 113 fracciones X y XI, de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, así como 439 del *Código de Justicia Militar*, ese Órgano Jurisdiccional daría vista a las partes sobre la pretensión de este Instituto de acceder a la supra citada averiguación previa, tomando en cuenta que la causa penal de mérito, actualmente se encuentra en fase de Instrucción.

Al respecto, el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* establece lo siguiente:

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

...

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

...



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En este sentido, el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, dispone que se considera como información reservada a los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado.

Por su parte, el artículo 27 del Reglamento de la Ley de la materia dispone que al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los titulares de las unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en las dependencias y entidades; lo cual implica que los sujetos obligados deben llevar a cabo la debida motivación, para acreditar que la información se ubica en el supuesto jurídico invocado.

Aunado a lo anterior, el segundo párrafo del Octavo de los *Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal* (en adelante, Lineamientos Generales) establece que al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14 y 18 de la Ley de la materia, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos artículos.

De la normatividad antes señalada, se advierte que es información reservada aquellos expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, **en tanto no hayan causado estado y**, además, al clasificar información, los titulares de las unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley en comento; por lo que las dependencias y entidades deben llevar a cabo la debida motivación para acreditar que la información se ubica en el supuesto jurídico invocado.

Por su parte, el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales señala que para los efectos de la fracción IV del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se considerará reservada la **información contenida en los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, relativa a aquellas actuaciones y diligencias propias del juicio o procedimiento respectivo de acuerdo con la legislación aplicable, en tanto éstos no hayan causado estado o ejecutoria.**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

De las anteriores disposiciones normativas, se advierte que para clasificar información con base en el artículo 14, fracción IV de la Ley de la materia, se requieren tres elementos:

1. Se trate de un expediente judicial o procedimiento de carácter administrativo seguido en forma de juicio;
2. Que dicho procedimiento no haya causado estado, y
3. Se trate de actuaciones y diligencias propias del expediente judicial.

Así, en el caso que nos ocupa, la Secretaría de la Defensa Nacional clasificó la información solicitada en virtud de que **la misma forma parte de la causa penal 338/14**, radicada en el Sexto Juzgado Militar, la cual precisó, se encuentra en **etapa de instrucción**, existiendo pruebas pendientes por desahogarse.

En este sentido, por cuanto hace al primer requisito de clasificación de la causal de mérito, es decir, la existencia de un proceso judicial o administrativo seguido en forma de juicio; el mismo se cumple a cabalidad, en virtud de que efectivamente, tal y como se desprende de las actuaciones que obran agregadas al expediente que se tienen a la vista para resolver el presente asunto, específicamente, la respuesta primigenia del sujeto obligado, sus alegatos, el Acta de Administrativa de Acceso a la Información Reservada y el oficio de fecha 20 de abril de 2015, mediante el cual se desahogó el requerimiento de información adicional por este Instituto, se advierte que la Secretaría de la Defensa Nacional manifestó que la averiguación previa solicitada por el particular, a la fecha forma parte de una causa penal, radicada en el Juzgado Sexto Militar, misma en la que se determina la constitución de delitos del orden militar, tales como desobediencia e infracción de deberes militares.

En congruencia con lo anterior, del marco normativo abordado a estudio en la presente resolución, pudo advertirse que **corresponde al Ministerio Público Militar, ejercitar la acción penal**, y por su parte, compete al juez de la causa **instruir los procesos de la competencia de los consejos de guerra, así como los de la propia.**

Es decir, se tiene la certeza de que la averiguación previa materia de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, a la fecha y derivado del ejercicio de la acción penal militar, se encuentra inmersa en la causa penal número **338/14**, de la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

que conoce el Juez Sexto Militar, por delitos del orden castrense y cuya etapa procesal es la instrucción.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la clasificación de la información que nos ocupa fue invocada por parte del Supremo Tribunal Militar.

A mayor abundamiento, el segundo de los elementos requeridos para que proceda la clasificación de la información con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV de la Ley de la materia, es que el expediente judicial o procedimiento de carácter administrativo no haya causado estado.

Tal y como ha quedado plasmado en el cuerpo de la presente resolución, la Secretaría de la Defensa Nacional manifestó que la etapa procesal de la causa penal **338/14**, es la instrucción, existiendo pruebas pendientes por desahogarse.

En congruencia con lo anterior, tal y como quedó señalado en el considerando Tercero de la presente resolución, el *Código de Justicia Militar*, señala la manera procedimental en que debe desarrollarse la instrucción.

En este sentido, la referida instrucción, debe practicarse a la brevedad posible a fin de que el procesado sea juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo.

También se establece que, cuando el juez creyere concluida la instrucción, ordenará que se ponga la causa a la vista de las partes, a efecto de que promuevan las diligencias que a su derecho convengan; posteriormente el juez declarará cerrada la misma y mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público y de la defensa, a efecto de que en el término de cinco días para cada una de las partes, formulen sus conclusiones.

En este sentido, cuando las conclusiones del Ministerio Público fueren acusatorias y el delito de la competencia del juez, fenecido el plazo para que la defensa presente las suyas, se citará a una audiencia dentro del tercer día, verificándose esta, concurran o no las partes; diligencia en la que las partes podrán alegar lo que a su derecho convenga.

Finalmente se establece que la citación para la audiencia produce efectos de citación para sentencia y el juez fallará dentro de los ocho días siguientes.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

De lo antes expuesto, se advierte que a la fecha, no ha sido emitida la sentencia correspondiente por parte del Juez de la causa, y por lo tanto el juicio por delitos del orden militar sigue substanciándose; en este sentido, aun y cuando sea expedida la resolución correspondiente, la misma es susceptible de impugnarse ante el Tribunal de Alzada, lo anterior conlleva que a la fecha el proceso judicial no ha causado estado, puesto que inclusive sigue substanciándose en el Juzgado Sexto Militar.

Ahora bien, el último de los elementos establece que la información en cuestión debe corresponder a actuaciones y diligencias propias del juicio, a fin de evitar injerencias externas que vulneren o interfieran con la objetividad e imparcialidad de la autoridad que resuelve.

Es decir, la *ratio legis* del precepto legal en cita, consiste en proteger la capacidad juzgadora de la autoridad encargada de resolver el procedimiento, de tal manera que únicamente deben ser considerados como reservados aquellos documentos cuya difusión pudiera causar un perjuicio a la substanciación del proceso judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio correspondiente.

En el caso que nos ocupa, resulta necesario recordar que la averiguación previa es la etapa en la que el Ministerio Público Militar, efectúa todas las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, por lo que una vez que este cuenta con los elementos suficientes, el Ministerio Público ejercita la acción penal correspondiente, y como consecuencia de lo anterior, el Juez de la causa, en ejercicio de sus facultades instruye el proceso correspondiente.

En relatadas condiciones, resulta oportuno precisar que el sujeto obligado manifestó, durante la diligencia de acceso a la información, que la averiguación previa de mérito ya había sido consignada, **radicándose la misma en su totalidad en original**, al Juzgado Sexto Militar, bajo el número de partida 338/15.

De lo anterior, puede colegirse que las actuaciones de la averiguación previa solicitada por el particular forman actualmente parte integral de la causa penal **338/14**, radicada en el Juzgado Sexto Militar, derivado del ejercicio de la acción penal decretado por el Ministerio Público Militar.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En ese sentido, se considera que la información requerida constituye una actuación o diligencia propia del juicio militar con número de expediente **338/14**, por lo tanto, se trata de un elemento cuya difusión pueda vulnerar la objetividad e imparcialidad de la autoridad que resuelve el juicio invocado por el sujeto obligado.

Por lo anterior, puede colegirse que existe un vínculo entre la información solicitada y el expediente militar radicado bajo el número de causa penal **338/14**, puesto que constituye una actuación o diligencia propia del juicio de mérito, por lo que su difusión daría lugar a un posible menoscabo en la sustanciación del proceso de referencia; luego entonces, en relatadas condiciones, se actualiza el tercer requisito de clasificación de la causal invocada.

Ahora bien, una vez que han quedado superados los elementos para actualizar la clasificación de información con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, es de suma importancia, en el caso que nos ocupa, verificar si es procedente la excepción de clasificación, contemplada en el último párrafo del precepto jurídico de referencia.

A este respectó, el artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, señala en su parte conducente, lo siguiente:

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

...

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

...

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

A efecto de abordar de manera integral el análisis de dicho supuesto normativo, resulta menester recordar que el particular adujo desde su solicitud de acceso a la información, entre otras, las siguientes manifestaciones:

- Que el artículo 14 último párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, prevé que no podrá invocarse el



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

carácter de reservado de la información, cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de que la averiguación previa correspondiente siga abierta.

- Que el Instituto Nacional de Migración, entregó información que integraba la averiguación previa por el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, al considerar el propio instituto que los hechos contenidos en esa averiguación previa eran constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de que la averiguación seguía abierta.
- Que lo ocurrido en Tlatlaya se perfila como una ejecución extrajudicial, lo que contraviene los tratados internacionales sobre derechos humanos que a firmado el Estado Mexicano.
- Que la *Ley General de Víctimas* establece que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, sobre todo cuando hablamos de hechos que son considerados como graves violaciones a los derechos humanos.

En su respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional manifestó que los delitos imputados al personal militar fueron, para el oficial, **desobediencia e infracción de deberes militares** correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, y al personal de tropa por **infracción de deberes militares** correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, de conformidad con los artículos 301 y 382 del *Código de Justicia Militar*.

Por otra parte, es necesario retomar lo que al efecto pudo advertirse de la búsqueda de información efectuada por este Instituto, mediante el boletín de prensa 175/14, emitido por la Procuraduría General de la República, a saber:

- *Que en relación a los hechos sucedidos el 30 de junio del 2014 en el poblado de San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, desde prácticamente el principio, iniciaron una serie de investigaciones, en razón de que la propia Secretaría de la Defensa había detectado algunas inconsistencias en cuanto a la aplicación de los protocolos de actuación.*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- En consecuencia, la Procuraduría General de la República inició una investigación que al poco tiempo, en razón de los datos recabados, se convirtió en averiguación previa.
- La Procuraduría General de la República tomó la determinación de culminar la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que pudieron detectar, independientemente de que ya la Secretaría de la Defensa les está siguiendo los proceso militares que corresponden a los ocho por el desacato, las fallas a la Ley Militar, a la de disciplina y desobediencia.

De lo antes relatado, puede concluirse lo siguiente:

- Que derivado de los hechos suscitados en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014, la Procuraduría General de la República determinó iniciar una averiguación previa, misma que culminó con una acusación de homicidio.
- Que independientemente de lo anterior la Secretaría de la Defensa les está siguiendo los proceso militares que corresponden por el desacato, las fallas a la Ley Militar, a la de disciplina y desobediencia.

En relación con lo antes esgrimido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la recomendación 51/2014, reconoce de manera expresa que además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, ese Organismo Nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de "V24" y "V25", y los tratos inhumanos en agravio de "V23", mujeres que estuvieron presentes en la bodega durante el momento de los hechos.

En este orden de ideas, el delito perseguido por la Procuraduría General de la República, consistió en el delito de homicidio de diversas personas, y el Código Penal Federal lo tipifica en los siguientes términos:

Artículo 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Por su parte, los delitos que se juzgan en la causa penal número 338/14, son la desobediencia y la infracción de deberes militares, cuya hipótesis normativa, el *Código de Justicia Militar* la describe de la siguiente manera:

Artículo 301.- Comete el delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior, para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado, para la fuerza de que dependa o que tuviese a sus órdenes.

Artículo 382.- El que infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, y el hecho u omisión no constituyere un delito especialmente previsto por este Código, será castigado con la pena de un año de prisión. Cuando la infracción sea debida a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses de prisión.

Como consecuencia de lo anterior, resulta de vital importancia saber lo que debe entenderse como un **bien jurídico**, y en este sentido, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, obra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, define dicho concepto de la siguiente manera:

BIEN JURÍDICO. I. Objeto de protección de las norma de derecho.

De este modo puede dilucidarse que el bien jurídico tutelado (objeto de protección) por el artículo 302 del *Código Penal Federal* que contiene la hipótesis normativa del homicidio, **es la vida**, el cual efectivamente la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* así como diversos instrumentos jurídicos internacionales, reconocen como un derecho humano.

Por su parte, los tipos penales militares establecidos en los artículos 301 y 382 del *Código de Justicia Militar*, tienen como bien jurídico tutelado (objeto de protección) **la disciplina militar**, en este sentido, es de explorado derecho que la disciplina militar no es un derecho humano, y mucho menos se encuentra reconocido en dispositivo jurídico alguno como tal.

Todo lo anterior conlleva al hecho de que, efectivamente los hechos acaecidos en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014, fueron catalogados como violaciones a derechos humanos, sin embargo, en el caso que nos ocupa, **no puede actualizarse la causal de excepción a la reserva de información,** invocada por el particular, en tanto que los delitos que se juzgan en la causa penal



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

número 338/14, son delitos del orden castrense como la desobediencia e infracción de deberes militares, cuyo bien jurídico tutelado es la disciplina militar y no derecho humano alguno.

Robustece todo lo antes expuesto, el criterio sostenido por la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso "*Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos*"⁹, el cual nos ilustra, respecto de la competencia de los tribunales militares y del orden civil.

En relatadas condiciones, es necesario transcribir los siguientes fragmentos de dicha resolución:

272. El Tribunal considera pertinente señalar que reiteradamente ha establecido que la jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, su utilización debe ser mínima, según sea estrictamente necesario, y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar 274.

273. Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos²⁷⁵ sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria²⁷⁶. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que '[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a *fortiori*, el debido proceso', el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia²⁷⁷. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial²⁷⁸.

274. En consecuencia, tomando en cuenta la jurisprudencia constante de este Tribunal (*supra* párrs. 272 y 273), debe concluirse que si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este sentido, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.

⁹ http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/Radilla_Pacheco.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En este sentido, y de la simple lectura que se efectuó a los razonamientos **vertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos** en la resolución de referencia, puede desprenderse la postura adoptada por dicho Tribunal Internacional, desprendiéndose lo siguiente:

- Que **el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.**
- Que **tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado**, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.
- Que esa Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas ocasiones, señalando que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori¹⁰, el debido proceso.
- Que **frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.**

Así las cosas, de lo anterior únicamente puede reafirmarse lo ya expuesto en el cuerpo de la presente resolución, esto es, que los tribunales militares solo son competentes para juzgar de delitos que atentan contra bienes jurídicos tutelados propios del orden castrense, y no por acciones u omisiones que deriven en violaciones de derechos humanos.

Ahora bien, de los resolutivos plasmados en la sentencia que resolvió el asunto de "*Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos*", se **dispuso** en relación al asunto que nos ocupa, lo siguiente:

10. El Estado **deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar** con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre

¹⁰ Locución latina que significa 'con mayor motivo'.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente Sentencia.

De lo anterior, se desprende que la Corte Internacional de Derechos Humanos determinó que el Estado Mexicano debería adoptar las reformas legislativas tendientes a empatar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de su portal electrónico¹¹, exhibe información denominada "Supervisión de Cumplimiento de Sentencia", la cual establece entre otras cosas, lo siguiente:

20. El Tribunal observa que el Estado ha desplegado esfuerzos tendientes a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Al respecto, la Corte estima conveniente recordar que en la Sentencia estableció que 'tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria'[10]. Con base en ello, en la Sentencia encontró responsable al Estado mexicano porque la disposición señalada es 'amplia e imprecisa', el impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado'[11], y porque 'extend[ía] la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense'[12].

21. Teniendo presente lo anterior, la Corte estima que si bien son positivos los esfuerzos del Estado para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, la iniciativa presentada es insuficiente pues no cumple plenamente con los estándares indicados en la Sentencia. En efecto, dicha reforma sólo establece que la jurisdicción militar no será competente tratándose, únicamente, de la desaparición forzada de personas, la tortura y la violación sexual cometidas por militares. No obstante, en la Sentencia, este Tribunal reiteró su jurisprudencia constante en el sentido de que 'el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar'[13], por lo cual las violaciones de derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles no pueden ser objeto de la competencia de la jurisdicción militar[14].

¹¹ http://fueromilitar.scjn.gob.mx/fm_sentenciasradilla.htm



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

De lo antes transcrito, se advierte que el Estado Mexicano se ha dado a la tarea de reformar de conformidad con lo resuelto en la sentencia dictada con motivo del caso "*Radiilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos*", el *Código de Justicia Militar*, a efecto de que dicho cuerpo normativo delimite plenamente la competencia de los Tribunales Militares; en este sentido, de la reforma efectuada al artículo 57 del Código de referencia, realizada en fecha 13 de junio de 2014, en comparación con lo antes dispuesto por dicho precepto legal, se aprecia de la siguiente manera:

<p>Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar:</p> <p>I.- Los especificados en el Libro Segundo de este Código;</p> <p>II.- los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:</p> <p>a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo;</p> <p>b).- que fueren cometidos por militares en un buque de guerra o en edificio o punto militar u ocupado militarmente, siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique el servicio militar;</p> <p>c).- que fueren cometidos por militares en territorio declarado en estado de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas del derecho de la guerra;</p> <p>d).- que fueren cometidos por militares frente a tropa formada o ante la bandera;</p> <p>e).- que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I.</p> <p>Quando en los casos de la fracción II, concurren militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar.</p>	<p>Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar:</p> <p>I.- Los especificados en el Libro Segundo de este Código, con las excepciones previstas en el artículo 337 bis;</p> <p>II.- los del orden común o federal, siempre y cuando no tenga la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva, o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en ley penal como delito, en los siguientes supuestos:</p> <p>a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo;</p> <p>b).- que fueren cometidos por militares en un buque de guerra o en edificio o punto militar u ocupado militarmente, siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique el servicio militar;</p> <p>c).- se deroga;</p> <p>d).- que fueren cometidos por militares frente a tropa formada o ante la bandera;</p> <p>e).- que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I.</p> <p>Los delitos del orden común o federal que</p>
--	--



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Los delitos del orden común que exijan querrela, necesaria para su averiguación y castigo, no serán de la competencia de los tribunales militares, sino en los casos previstos en los incisos (c) y (e) de la fracción II.	fueren cometidos por militares en tiempo de guerra, territorio declarado en ley marcial, o cualquiera de los supuestos previstos en la constitución, corresponderán a la jurisdicción militar siempre y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil. En todos los casos, cuando concurren militares y civiles como sujetos activos, solo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar. Los delitos del orden común que exijan querrela, necesaria para su averiguación y castigo, no serán de la competencia de los tribunales militares, sino en los casos previstos en el inciso (e) de la fracción II.
--	--

De todo lo antes expuesto, se advierte que a la luz de los razonamientos vertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tratándose de delitos que vulneren derechos humanos, no podrán ser competentes los tribunales militares, siendo exclusivo de estos, resolver sobre delitos del orden castrense, cuyos bienes jurídicos tutelados son la disciplina militar y el orden castrense.

Finalmente no pasa desapercibido mencionar que, derivado de la última diligencia realizada por este Instituto, se advierte que el **Juez Sexto Militar señaló que ese Órgano Jurisdiccional daría vista a las partes, tomando en cuenta que la Causa Penal a que se hace referencia se encuentra actualmente dentro del período de Instrucción.**

En virtud de lo anterior, se considera **procedente la clasificación** invocada por la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, **por delitos militares presuntamente cometidos** en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con fundamento en el artículo **14, fracción IV** de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

En este sentido, y en relación al plazo de reserva, en el artículo 15 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se establece que la información clasificada podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años y dicha información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva.

Así, en el asunto que nos ocupa, el sujeto obligado clasificó la información solicitada por un periodo de doce años; sin embargo, este Instituto considera que **el plazo de reserva debe ser por el período de 2 años, o hasta en tanto no se**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

emita la respectiva sentencia, y ésta cause estado, a partir de la fecha de votación de la presente resolución; lo anterior, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, o bien en términos de lo dispuesto por el artículo 34, fracciones II y IV del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, es decir, cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la misma.

Lo anterior, debido a que el citado *Código de Justicia Militar*, en su artículo 616, establece lo siguientes:

Artículo 616.- La instrucción se practicará a la brevedad posible, a fin de que **el procesado sea juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión** y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.

De lo anterior, se advierte que, en el fuero castrense, **la instrucción se practicará a la brevedad posible, a fin de que el procesado sea juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión.**

En este sentido, cabe reiterar que el artículo 382 del *Código de Justicia Militar* prevé que **el que infrinja alguno de los deberes que le corresponden**, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, y el hecho u omisión no constituyere un delito especialmente previsto por el referido Código, **será castigado con la pena de un año de prisión**; a menos que la infracción se deba a torpeza o descuido, en cuyo caso la pena será de cuatro meses de prisión.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que Ley de la materia y su Reglamento establecen lo siguiente:

Artículo 43. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.

Artículo 45. En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos como reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio, con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, al Comité de la dependencia o entidad, mismo que deberá resolver si:

- I. Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información, o
- II. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

El Comité podrá tener acceso a los documentos que estén en la unidad administrativa. La resolución del Comité será notificada al interesado en el plazo que establece el Artículo 44. En caso de ser negativa, deberá fundar y motivar las razones de la clasificación de la información e indicar al solicitante el recurso que podrá interponer ante el Instituto.

Artículo 70. Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberá desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de Enlace. En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo siguiente:

I. Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las unidades administrativas que puedan tener la información dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud;
[...]

III. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada es reservada o confidencial, deberá remitir al Comité, tanto la solicitud de acceso como una comunicación en la que funde y motive la clasificación correspondiente, dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud. El Comité podrá confirmar, modificar o revocar la clasificación mencionada, para lo cual podrá tener acceso a los expedientes o documentos clasificados. En todo caso emitirá una resolución fundada y motivada;

IV. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada contiene documentos reservados o confidenciales, o un documento que contenga partes o secciones reservadas con este tipo de información, deberá remitir al Comité, la solicitud de acceso y una comunicación en la que funde y motive la clasificación correspondiente en el mismo plazo a que se refiere la fracción anterior, así como la reproducción de una versión pública de los documentos que no estén clasificados o en los que se hayan omitido las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. El Comité podrá confirmar, modificar o revocar la clasificación mencionada, para lo cual podrá tener acceso a los expedientes o documentos clasificados. En su caso, el Comité procederá conforme lo establece el artículo 41 de este Reglamento y emitirá una resolución fundada y motivada, y
[...]

Los Comités deberán emitir las resoluciones a que se refieren los artículos 45 y 46 de la Ley con la mayor rapidez posible.

De lo anterior, se desprende lo siguiente:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

1. La unidad de enlace debe turnar la solicitud de información a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información.
2. Cuando la unidad administrativa haya clasificado los documentos como reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio, con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, al Comité de la dependencia o entidad, mismo que deberá resolver si:
 - Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información, o
 - Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.
3. El Comité de Información, deberá analizar el caso y podrá tener acceso a los documentos que estén en la unidad administrativa.
4. En todo caso, el Comité emitirá una resolución fundada y motivada, que será notificada al interesado.

En el caso que nos ocupa, y de las constancias que obran en el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que el sujeto obligado si bien siguió el procedimiento descrito en los artículos que anteceden para clasificar la información solicitada, con fundamento el artículo 14, fracción IV de la Ley de la materia; **dicha clasificación únicamente subsiste hasta en tanto no se emita la respectiva sentencia, y ésta cause estado.**

Por tanto, el sujeto obligado deberá sin efectos el oficio número CI/RIR/2270/14, de fecha 21 de enero de 2015, denominado "RESOLUCIÓN DE INFN. RESERVADA", signado por los Integrantes del Comité de Información, mediante el cual se determinó procedente clasificar como reservada la información solicitada, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley de la materia, por un período de doce años.

Por todo lo antes expuesto, este Instituto considera **parcialmente fundado** el agravio vertido por el particular y, en consecuencia, determina procedente **modificar** la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se le **instruye** para que clasifique como reservada, **por el periodo de 2 años, o hasta en tanto no se emita la respectiva sentencia, y ésta cause estado,** la averiguación



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares presuntamente cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley de la materia, a través del Comité de Información, quien deberá emitir una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, y notifique al particular dicha declaratoria de reserva.

Ahora bien, y toda vez que la modalidad de entrega que eligió el particular fue a través de Internet en el INFOMEX, y en razón de que ello ya no es posible por esta vía; el sujeto obligado deberá poner a disposición del particular la información señalada, ya sea remitiéndola a su correo electrónico o ingresándola a un sitio de Internet y comunicando a éste los datos que le permitan acceder a la misma. Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 50 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 55, fracción V y 56, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se **MODIFICA** la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, en términos de lo expuesto en el último considerando.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 56, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, así como 91 de su Reglamento, se instruye al sujeto obligado para que en un término no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y en el mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento.

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos de los artículos 37, fracción X, 56, último párrafo, y 63, penúltimo párrafo, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

CUARTO.- Con fundamento en los artículos 37, fracción XIX, y 56, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*; 23, fracción XXI del *Reglamento Interior del Instituto Federal de*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud:** Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Acceso a la Información y Protección de Datos; así como en el numeral tercero del Acuerdo por el que se delegan diversas facultades de representación legal del Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil siete, se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información, a través de la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal del Instituto el seguimiento de la presente resolución.

QUINTO.- Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el artículo 59, primer párrafo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 86 del Reglamento de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, notifíquese la presente resolución al recurrente en la dirección señalada para tales efectos, y a través de la Herramienta de Comunicación, al Comité de Información del sujeto obligado, a través de su Unidad de Enlace.

SÉPTIMO.- Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 TELIFAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@ifai.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución.

OCTAVO.- Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.

Así lo resolvieron por mayoría, y firman los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana con voto disidente, Oscar Mauricio Guerra Ford con voto disidente, María Patricia Kurczyn Villalobos con voto particular, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo ponente el segundo de los señalados, en sesión celebrada el 24 de junio de 2015, ante Adrián Alcalá Méndez, Coordinador de Acceso a la Información, con las funciones del Secretario de Acceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto.

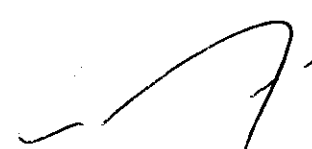


Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio de la solicitud: 0000700227014
Número de expediente: RDA 0463/15
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas



Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidenta



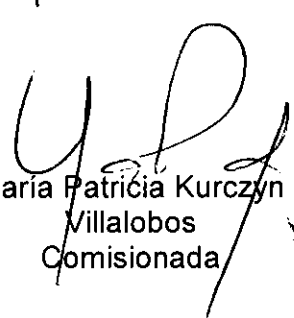
Francisco Javier Acuña
Llamas
Comisionado



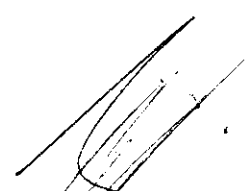
Areli Cano Guadiana
Comisionada



Oscar Mauricio Guerra
Ford
Comisionado



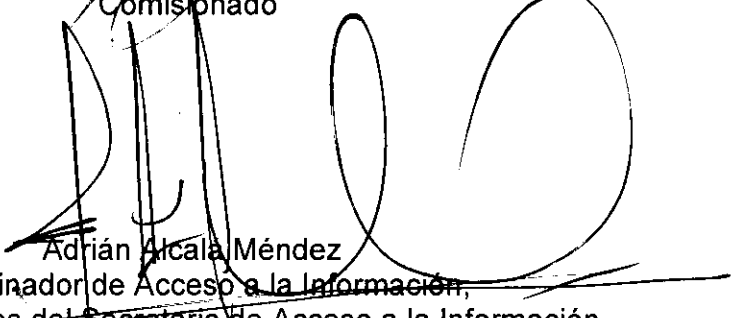
María Patricia Kurczyn
Villalobos
Comisionada



Rosendo Evgueni
Monterrey Chepov
Comisionado



Joel Salas Suárez
Comisionado



Adrián Alcalá Méndez
Coordinador de Acceso a la Información,
con las funciones del Secretario de Acceso a la Información
previstas en el Reglamento Interior de este Instituto

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión RDA 0463/15, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 24 de junio de 2015.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE
Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

VOTO DISIDENTE DE LOS COMISIONADOS ARELI CANO GUADIANA Y OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EMITIDO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RDA 0463/15 INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL VOTADA EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2015.

En el presente asunto, la particular solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, versión pública de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares presuntamente cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Supremo Tribunal Militar, señaló que la información solicitada se encontraba reservada, por un período de 12 años, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que se trata de un expediente judicial seguido en forma de juicio el cual no ha causado estado.

Asimismo, precisó que los delitos que se le imputan al personal militar son, para el oficial, desobediencia e infracción de deberes militares, y al personal de tropa, infracción de deberes militares, de conformidad con los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar.

Vale la pena transcribir dichos artículos para tener contexto:

“Artículo 301.- Comete el delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior, para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado, para la fuerza de que dependa o que tuviese a sus órdenes.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

**Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford**

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Artículo 382.- El que infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, y el hecho u omisión no constituyere un delito especialmente previsto por este Código, será castigado con la pena de un año de prisión. Cuando la infracción sea debida a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses de prisión.”

En ese sentido, el sujeto obligado anexó a su respuesta la resolución signada por los miembros del Comité de Información, mediante la cual confirmó la reserva de la información solicitada por 12 años.

Inconforme con la respuesta proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el particular presentó recurso de revisión, mediante el cual manifestó como agravio, la reserva de la información, precisando que la misma debía proporcionarse ya que los hechos ocurridos en Tlatlaya han sido reconocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como violaciones graves de derechos humanos mediante la recomendación 51/2014, y el acuerdo número CNDH/2/2014/5390/Q, por lo que se actualiza el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que prevé que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Ahora bien, en la resolución del recurso de revisión que nos ocupa, con los votos del Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas y; de los Comisionados María Patricia Kurzcyn Villalobos, Ximena Puente de la Mora, y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se determinó modificar la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, para el único efecto de que ésta modificara el plazo de reserva de 12 a 2 años o, hasta en tanto la sentencia cause estado. Es decir se determinó que es válida la clasificación de la información con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley de la materia, bajo los siguientes argumentos centrales:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

1. A la fecha de la resolución y derivado del ejercicio de la acción penal militar, la averiguación previa requerida se encuentra inmersa en la causa penal número **338/14**, de la que conoce el Juez Sexto Militar, por delitos del orden castrense y cuya etapa procesal es la instrucción, razón por la cual se actualiza la hipótesis de reserva prevista en el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que prevé que es información reservada los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado.
2. No puede actualizarse la causal de excepción a la reserva de la información, prevista en el último párrafo del artículo 14, en tanto que *"...los delitos que se juzgan en la causa penal número 338/14, son delitos del orden castrense como la desobediencia e infracción de deberes militares, cuyo bien jurídico tutelado es la disciplina militar y no derecho humano alguno."*
3. La Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso "*Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos*"¹, y en la Supervisión del Cumplimiento de sentencia de dicho caso concluyó lo siguiente:
 - Que el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
 - Que tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.

¹ http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/Radilla_Pacheco.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

- Que esa Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas ocasiones, señalando que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori², el debido proceso.
- Que **frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.**

Por lo tanto, "...en tratándose de delitos que vulneren derechos humanos, no podrán ser competentes los tribunales militares, siendo exclusivo de estos, resolver sobre delitos del orden castrense, cuyos bienes jurídicos tutelados son la disciplina militar y el orden castrense." (sic)

Al respecto, no compartimos la decisión adoptada por la mayoría en el sentido de que debe modificarse la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional únicamente para que cambie el plazo de reserva, por las consideraciones que a continuación exponemos.

Desde el punto de vista procesal, es importante recordar que el 3 de junio del presente año, el Comisionado Ponente presentó un proyecto de resolución proponiendo confirmar la clasificación de la información por tratarse de un expediente judicial en trámite con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley de la materia.

En dicha sesión, el Pleno de este Instituto acordó por mayoría posponer la votación del recurso presentado, a efecto de que se allegara de los elementos suficientes para resolver el fondo del mismo, a partir de una diligencia de acceso a documentos.

En ese sentido, el 15 de junio del presente año, se convocó a la Secretaría de la Defensa Nacional a una segunda diligencia de acceso a la información clasificada; sin

² Locución latina que significa 'con mayor motivo'.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE
Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford

Expediente: RDA 0463/15
Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio: 0000700227014
Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

embargo, no se exhibió el expediente de la causa penal 338/14, ya que el personal del sujeto obligado indicó que cualquier requerimiento de consulta al expediente debía ser solicitado oficial y directamente al Juez 6° Militar.

Así, el 18 de junio del dos mil quince, el Comisionado Ponente solicitó al Juez Sexto Militar, se le brindaran las facilidades necesarias para que se permitiera el acceso a la averiguación previa que se encuentra agregada a la causa penal 338-14, radicada en ese Juzgado.

En respuesta, al oficio referido, el Juez Sexto Militar indicó que daría vista a las partes de la causa penal 338/14, y que haría del conocimiento a este Instituto sobre el acuerdo recaído a dicha pretensión, con fundamento en los artículos 6, 8, 13, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 fracción V, 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 113 fracciones X y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 439 del Código de Justicia Militar.

De los artículos citados de la Constitución, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se desprende que el Juez deba solicitar el consentimiento de las partes para permitir a este Instituto el acceso a la información.

Por otro lado, el artículo 439 del Código de Justicia Militar establece que en los procesos sólo serán considerados como partes, el Ministerio Público, el procesado y sus defensores y que la víctima o el ofendido por algún delito tienen el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público. Es decir, sólo refiere quiénes son partes en los procesos penales, pero no señala que éstas deban dar su consentimiento para que una autoridad como es este Instituto pueda acceder a la averiguación.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

**Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford**

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Aunado a lo anterior, en el artículo 17, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se establece que en todo momento este Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso; asimismo, en el diverso 55, fracción II, de la Ley de la materia, se señala que el Pleno de este órgano garante podrá determinar la celebración de audiencias con las partes, y en el artículo 29 del Reglamento de la Ley en cita, se prevé que este Instituto podrá solicitar a la dependencia o entidad un informe sobre el contenido de la información reservada o confidencial y, en caso de que este resulte insuficiente, podrá citar a la dependencia o entidad para aportar los elementos que permitan determinar la clasificación correspondiente.

En tal virtud, si bien el sujeto obligado fundamenta la negativa de otorgar acceso a la causa penal, en diversos supuestos de clasificación, como lo es la prevención o persecución de delitos así como aquella información relativa a los expedientes judiciales seguidos en forma de juicio en tanto que no hayan causado estado; lo cierto es que, este Instituto cuenta con las facultades legales para tener acceso a información clasificada como reservada o confidencial, sin necesidad que medie consentimiento de las partes involucradas.

Esto es así pues la razón de dicha facultad es que este Instituto cuente con los elementos necesarios para determinar si se actualiza o no una causal de reserva, o bien, si debe proporcionarse la información por ser de naturaleza pública. Es decir, el que este órgano autónomo la revise a través de una diligencia de acceso a documentos, no se traduce en que la misma se hará pública, pues ello depende de la determinación que adopte este colegiado, por lo que el personal facultado para acceder a la información debe mantener en sigilo de la misma hasta en tanto el Pleno no determine lo conducente.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

**Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford**

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

**Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas**

Es un hecho que al no haberse tenido una respuesta favorable para permitir a este órgano autónomo la diligencia de acceso, no se contó con los elementos necesarios para resolver el caso que nos ocupa. Además, el sujeto obligado no sólo ha dificultado el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto, sino también ha soslayado la oportunidad de acreditar que las instituciones del Estado mexicano encargadas de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como de realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, están comprometidas con las mejores prácticas de rendición de cuentas y transparencia, componentes esenciales de un gobierno democrático.

Bajo dicho contexto, si bien se acreditó que la causa penal número 338/14, en la que obra la averiguación previa requerida, se encuentra en etapa de instrucción, al no permitirse la diligencia de acceso a la información, no fue posible determinar si la respuesta del sujeto obligado debía confirmarse, modificarse o revocarse, atendiendo a lo previsto en la Ley de la materia.

Ahora bien, de haberse permitido el acceso a la información, el siguiente paso sería hacer un estudio sistemático e integral de las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para determinar si se actualiza la hipótesis de reserva invocada por el sujeto obligado, esto es, la prevista en el artículo 14, fracción IV de la citada Ley, o bien, algún supuesto de excepción a dichas causales, como la prevista en el último párrafo del precepto mencionado, que establece que "No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad", sobre todo considerando que el recurrente la hizo valer en su recurso de revisión, y que de los hechos públicos que a continuación se analizan, se desprende que las conductas ilícitas que dieron origen a la presunta desobediencia o infracción de deberes militares, podrían estar referidas a aquellas que desencadenaron los lamentables hechos de Tlatlaya.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

**Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford**

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En tal virtud, se trae a colación que el 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación No. 51/2014, sobre lo acaecido en Tlatlaya, concluyendo que se violaron diversos derechos humanos, y el 13 de enero de 2015, la misma Comisión hizo pública la "reclasificación" de los hechos, y declaró que la investigación era de "violaciones graves" de derecho humanos. Es decir, existe ya el pronunciamiento por parte de una autoridad competente, de que en dicho suceso se actualizaron violaciones graves a derechos humanos.

Ahora bien, a nuestro juicio, lo que determina la posible violación grave de derechos humanos no es en sí el delito que se persigue, sino los hechos que dieron lugar a éstos, y con independencia de la autoridad que esté conociendo del asunto.

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, del 31 de enero de 2006, se pronunció en los siguientes términos:

"112. La responsabilidad internacional del Estado se funda en "actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana"³, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios⁴. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste."

³ Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 7, párr. 110; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 188, párr. 71, y Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 142.

⁴ Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 7, párr. 110; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 141, y Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 41.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE
Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford

Expediente: RDA 0463/15
Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio: 0000700227014
Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Como se advierte, ha sido criterio de la Corte que para determinar si se ha producido una violación a los derechos humanos, no se requiere determinar la culpabilidad de alguna persona respecto de algún tipo penal, o su intencionalidad, así como tampoco la identificación de los agentes a quienes se les atribuyen los hechos. El mismo criterio sigue la Recomendación No. 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues para su emisión, y la definición de la naturaleza de las violaciones no se consideraron dichos elementos.

En ese orden de ideas, para que este Instituto en el caso concreto, se pronuncie sobre la actualización del último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, no debe considerar los delitos tipificados que se persiguen, las personas involucradas o la autoridad que indaga, sino que debe atender a los hechos que se suscitaron.

En relación a ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en su Recomendación número 51/2014, que los militares implicados violaron diversas disposiciones del Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas, haciendo un uso indebido de ésta al emplear armas letales en contra de víctimas sometidas, sin que existiera justificación.⁵

Asimismo, en el apartado "C. Consultas de averiguaciones previas", de dicha recomendación se señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo acceso a documentos que obran dentro de la averiguación previa incoada por la Procuraduría de Justicia Militar, como son declaraciones de los militares presentes en los hechos rendidas ante el Agente del Ministerio Público Militar⁶, mensajes que hacen referencia a acciones de mando en el que se señalan las medidas adoptadas por el batallón, "San Antonio el Rosario", así como una descripción de los hechos acontecidos el 30 de junio de 2014⁷.

⁵ Párrafos 245 y 377.

⁶ Párrafos 75.8.2; 75.8.7; 75.8.8; 75.8.9; 75.8.10; 75.9 y 75.9.1 de la Recomendación.

⁷ Párrafo 75.8.4 y 75.8.5



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Finalmente, se señala en la parte conducente de "Recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional", además de la reparación del daño, las siguientes:

"TERCERA. Se giren instrucciones a efectos de que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional den cumplimiento estricto al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, absteniéndose de privar de la vida o atentar en contra de la integridad de personas rendidas, debiéndose informar a esa Institución sobre el cumplimiento de la misma.

...

-SÉPTIMA. Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia Militar para que, en el ámbito de su competencia, se inicie la averiguación previa, que en derecho corresponda, por las responsabilidades que se pudieran desprender de la conducta que motivó este pronunciamiento, que incluya al personal presente en el lugar de los hechos y, una vez realizado lo anterior, se dé vista del resultado de dicha investigación a la Procuraduría General de la República, debiéndose informar a esta institución sobre el cumplimiento de la misma.

..."

Por otro lado, si bien, en el ámbito castrense se están juzgando conductas de desobediencia e infracción de deberes militares, se debe tomar en cuenta que en el artículo 301 del Código de Justicia Militar se señala que comete el delito de desobediencia, el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Asimismo, se señala en el diverso 303 que el delito referido en actos del servicio será castigado con pena de treinta a sesenta años de prisión, cuando se efectúe frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE
Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Asimismo, en el artículo 382, del Código mencionado relativo a la infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, se señala que el que infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, y el hecho u omisión no constituyere un delito especialmente previsto por ese Código, será castigado con la pena de un año de prisión.

Por lo tanto, a partir de los elementos mencionados, concluimos que no existe certeza sobre la información materia de la solicitud, pues aunque los tipos penales analizados tengan como bien jurídico tutelado la disciplina militar, no puede soslayarse que atendiendo al caso concreto, podrían constituir las conductas que provocaron violaciones graves a derechos humanos el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que el 17 de abril del presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Supervisión de cumplimiento a la sentencia de los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Otros, y Rosendo Cantú y Otra vs. México, destacó en el apartado A. 2 *Información y observaciones de las partes y de la Comisión Interamericana*⁸, lo siguiente:

-Que México informó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 13 de junio de 2014 se había publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados", que entró en vigencia al día siguiente. Asimismo, sostuvo que dicha reforma garantiza que en las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas sean

⁸ Visible en: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/16-juris/20-supervision-de-cumplimiento>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

**Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford**

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

investigadas en el fuero civil, y solicitó se diera por cumplido lo ordenado por la Corte.
(Punto 6)

-Que en el caso Radilla Pacheco los representantes de las víctimas agregaron que esta reforma “aun permite el involucramiento militar en la etapa de investigación”, “contrario a los estándares internacionales” que implican que “sólo la autoridad civil debe recabar las pruebas y llevar a cabo las demás actuaciones”. (Punto 7)

-Que en los casos Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra, los representantes agregaron que “otra preocupación es la posibilidad de abrir causas paralelas en ambas jurisdicciones” y, a ese respecto, aseguraron que en un caso reciente sobre la presunta ejecución extrajudicial de varios civiles por parte de militares en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, se siguen causas paralelas en las jurisdicción civil y militar. (Punto 7)

-Que en el caso Radilla Pacheco, y en las sentencias de los casos Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, se señaló que “tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.” (Punto 12)

En ese sentido, se desprende que la Corte Interamericana ha señalado que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar hechos de alegadas violaciones de derechos humanos cuando son cometidos por militares en perjuicio de civiles⁹, y el Estado Mexicano, por su parte reformó el Código de Justicia Militar, el Código Federal de Procedimientos Penales y la

⁹ Casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

**Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford**

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a efecto de cumplir con dicha determinación.

El Código de Justicia Militar, sobre el particular, estipula en su artículo 57. II. a) que son delitos contra la disciplina militar los del orden común o federal, siempre y cuando no tenga la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en ley penal como delito, en el supuesto de que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo.

Sin embargo, no puede dejarse de lado que la misma Corte, alude a lo señalado por los representantes de las víctimas en cuanto a su preocupación sobre la posibilidad de abrir causas paralelas en ambas jurisdicciones, asegurando que en un caso reciente sobre la presunta ejecución extrajudicial de varios civiles por parte de militares en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, se siguen causas paralelas en las jurisdicción civil y militar, de ahí la relevancia de determinar si las infracciones están relacionadas con el homicidio de las 22 personas, pues como se señaló para determinar una violación grave, no se debe tomar en cuenta un aspecto formal como es la autoridad que está conociendo de la causa, o el nombre del tipo penal o infracción, sino los hechos.

En ese orden de ideas, si los hechos que está investigando la SEDENA como desobediencia e infracciones de deberes militares, tuvieran como objetivo el acreditar la probable responsabilidad de una acción u omisión de los militares involucrados, independientemente del nombre del tipo penal de naturaleza castrense, que dio como resultado la privación de la vida de las 22 personas que se encontraban en la bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, la SEDENA, se actualizaría la excepción de reserva prevista en el artículo 14 de la Ley de la materia.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

**Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford**

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Queda claro que las investigaciones que llevaron a cabo la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, se refieren a tipos penales distintos, la primera conoce de los delitos previstos en el Código Penal Federal y la segunda, de los delitos de naturaleza castrense previstos en el Código de Justicia Militar; sin embargo, estos últimos también podrían actualizar las conductas que dieron lugar a una violación grave de derechos humanos, ya determinada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, independientemente de que se sancionen como delitos del fuero militar.

Robustece lo anterior el hecho de que la Procuraduría General de la República, en la averiguación previa que siguió con motivo de los hechos de Tlatlaya, del 30 de junio de 2014, investigó la comisión de presuntos delitos tipificados en el Código Penal Federal, pero no como tal violaciones graves a derechos humanos, y lo mismo acontece para el caso de la justicia militar, en tanto que conoce de delitos del fuero militar.

Es decir, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles no puede operar la jurisdicción militar, también lo es que la existencia de violaciones graves a derechos humanos depende no del tipo penal, sino como se ha indicado, de los hechos, lo cual también ha sido criterio reiterado por dicha Corte.

Cabe aclarar que la determinación aquí plasmada no contraviene el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al cumplimiento parcial de la sentencia en los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Otros, y Rosendo Cantú y Otra vs. México, y tampoco prejuzga sobre el cumplimiento del Estado a dichas sentencias, únicamente se enfatiza que independientemente de la reforma de junio de 2014, que se realizó al Código de Justicia Militar, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, se considera que este Instituto, en el ámbito de sus facultades debe determinar si en la especie se actualiza el último párrafo del artículo 14, para lo cual



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE
Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

debe conocer la información requerida, independientemente de que conforme a las reformas en cuestión se haya determinado que son delitos contra la disciplina militar, los del orden común o federal, siempre y cuando no tenga la condición de civil el sujeto pasivo, pues insistimos, lo que determina las violaciones graves a derechos humanos no son los tipos penales ni la autoridad que los persigue, sino los hechos.

Además, debe destacarse que de actualizarse la excepción a la causal de reserva, la publicidad de dicha información, sería de gran trascendencia, ya que permite garantizar el derecho a la verdad que no sólo afecta a las víctimas y ofendidos en forma directa por los ilícitos cometidos, sino que trasgrede a toda la sociedad.

Ante tales circunstancias, y partiendo de que este Instituto no contó con los elementos suficientes para resolver lo que en derecho corresponde, ante la negativa del sujeto obligado para permitir el acceso a la indagatoria solicitada, consideramos que la resolución adoptada por la mayoría se encuentra alejada del mandato que nos confiere el artículo 6º, Constitucional en su apartado "A", fracción VIII, párrafo tercero, el cual vale la pena reproducir a continuación:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

[...]

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

[...]

VIII. [...]



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En su funcionamiento se registrará por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.”

Es claro el mandato Constitucional reproducido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debe registrarse bajo el principio de certeza, es decir, en todas nuestras resoluciones debemos tener plena, absoluta y contundente evidencia de que las declaraciones de certeza que emitamos para dirimir los conflictos que nos corresponden estén absolutamente apegados con la realidad fáctica, para lo cual tenemos plenas facultades de allegarnos de todos los elementos informativos para resolver, para lo cual toda autoridad debe colaborar con nosotros, tal y como lo ordena el mismo artículo 6°, Constitucional en su apartado “A”, fracción VIII párrafo décimo quinto, que también resulta conveniente transcribir a continuación:

“Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.”

Bajo la línea argumentativa expuesta, consideramos que la resolución votada por la mayoría, misma que es objeto del presente voto disidente, está totalmente alejada del principio de certeza al que nos obliga nuestra Carta Magna, pues se ha resuelto la controversia sobre la demanda informativa del particular sin un elemento clave a saber: el acceso que la Ponencia resolutora debió tener a la averiguación previa radicada en el Juzgado Militar, misma a la que SEDENA negó acceso sistemáticamente, tal y como puede advertirse con la instrumental de actuación del expediente de mérito, donde se pueden apreciar los cinco requerimientos formulados al sujeto recurrido, mismos que, se reitera, fueron injustificadamente ignorados y desatendidos.

En consecuencia el sentido de la resolución debió ser *modificar* la respuesta del sujeto obligado, a efecto de que, en el supuesto de que los hechos, independientemente del delito tipificado (desobediencia o infracción de deberes militares) se refieran a las



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

VOTO DISIDENTE

**Comisionados Areli Cano Guadiana y
Oscar Mauricio Guerra Ford**

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto Obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

conductas que provocaron el homicidio de las veintidós personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, en tanto que constituyen violaciones graves a derechos humanos, en términos del último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, proporcione al particular una versión pública de la averiguación previa requerida. Ahora bien, sólo en el caso de que dichas conductas no estén relacionadas con tales hechos, deberá hacerlo del conocimiento del solicitante a través de una resolución de su Comité, fundando y motivando la clasificación de la información en términos del artículo 14, fracción IV, por existir un expediente judicial que no ha causado estado.



Areli Cano Guadiana
Comisionada



Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

VOTO PARTICULAR
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos

Expediente: RDA 0463/15
Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa Nacional
Folio: 0000700227014
Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

VOTO PARTICULAR DE LA COMISIONADA MARÍA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS, QUE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE REVISIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RDA 0463/15 INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, VOTADO EN LA SESIÓN DEL PLENO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2015.

En el presente caso se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional copia electrónica de la versión pública de la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, en la que están involucrados elementos del ejército.

En respuesta la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del supremo Tribunal Militar, informó al particular que la información solicitada se encontraba reservada, por un periodo de 12 años, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental*, toda vez que se trata de un expediente judicial seguido en forma de juicio en cual no ha causado estado; además, el sujeto obligado precisó que la causa penal que se instruye es exclusivamente por delitos del orden militar previstos en los artículos 301 y 382 del *código de Justicia Militar*.

Con motivo de la respuesta dada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el particular interpuso recurso de revisión ante este Instituto, en el cual impugnó la reserva de la información requerida.

Ahora bien, en sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

VOTO PARTICULAR

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

veinticuatro de junio de dos mil quince, se votó –por mayoría– el proyecto de resolución que nos ocupa.

La determinación de la mayoría del Pleno, de mantener como reservada la información solicitada por el particular, con fundamento en la fracción IV del artículo 14 de la Ley de la materia, hasta en tanto no se emita la respectiva sentencia y ésta haya causado estado, obedeció a los siguientes razonamientos:

- La averiguación previa materia de la solicitud que nos ocupa, a la fecha y derivado del ejercicio de la acción penal militar, se encuentra inmersa en la causa penal número 338/14, de la que conoce el Juez Sexto Militar, por los delitos del orden castrense y cuya etapa procesal es la instrucción.
- La información requerida constituye una actuación o diligencia propia del juicio militar con número de expediente 338/14, por tanto, se trata de un elemento cuya difusión puede vulnerar la objetividad e imparcialidad de la autoridad que resuelve el juicio invocado por el sujeto obligado.
- En relación a la causal de excepción a la reserva de la información, establecida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, se precisa que:
 - De conformidad con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos”, en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
 - Tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.

VOTO PARTICULAR
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

- Bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de los civiles.

→ Si bien, los hechos acaecidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014, fueron catalogados como violaciones a derechos humanos, lo cierto es que en el caso que nos ocupa, **no puede actualizarse la causal de excepción a la reserva de información**, toda vez que los delitos que se juzgan en la causa penal número 338/14 son delitos del orden castrense, tales como la desobediencia e infracción de deberes militares, cuyo bien jurídico tutelado es la disciplina militar y no derecho humano alguno.

Derivado de lo anterior, debo señalar que si bien comparto el sentido de la resolución, así como sus efectos, me parece conveniente adicionar el siguiente razonamiento:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, estableció que en el fuero militar, las autoridades militares solamente pueden juzgar a personal castrense en activo por la comisión de delitos o faltas que por su naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, sin que en ningún caso, la jurisdicción de tales autoridades sea competente para investigar, juzgar ni sancionar a los autores de violaciones graves de derechos humanos, puesto que tales actividades corresponden exclusivamente a la justicia ordinaria.

De esta forma, de acuerdo con el aludido tribunal interamericano, si los militares en activo cometen actos delictivos que no afectan los bienes jurídicos del ámbito castrense, éstos deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, por lo que respecto de situaciones que vulneren derechos humanos de la población civil, bajo ninguna razón puede intervenir la jurisdicción militar.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano realizar las reformas legislativas pertinentes con el objeto de que el



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

VOTO PARTICULAR

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

artículo 57 del Código de Justicia Militar, en relación con el fuero militar, sea compatible con los estándares internacionales en la materia y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al respecto, cabe destacar que la incompatibilidad del artículo 57 citado, fue avalada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del expediente de Varios 912/2010.

Ahora bien, la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para el Estado mexicano en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue ratificada por México en marzo de 1981.¹ En dicho precepto se encuentra establecida la obligación para los Estados que forman parte de la misma, de adoptar disposiciones de derecho interno que permitan empatar la legislación nacional con los estándares internacionales contenidos en ese ordenamiento jurídico, con la finalidad de que las personas puedan ejercer plenamente los derechos ahí contenidos.

En tal virtud, el 13 de junio de 2014 fue reformado el artículo 57 del Código de Justicia Militar en términos de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que de acuerdo con este numeral, la jurisdicción militar no es competente en los casos en que personal militar en activo afecte a personas civiles, ya que dicha jurisdicción solamente puede intervenir en delitos cuyos bienes jurídicos tutelados sean el orden y la disciplina militar.

Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que el artículo 13 de la Constitución Federal establece una restricción al fuero militar, en el sentido de que **los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo pueden extender su jurisdicción sobre personas ajenas al ejército**. En ese sentido, cuando en

¹ Disponible para su consulta en: [http://www.oas.org/dil/esp/tratados B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados/B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm)

VOTO PARTICULAR
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

un delito o falta del orden militar esté implicado un civil, debe conocer del asunto la justicia ordinaria.

Es por ello que de conformidad con lo planteado, se advierte que conforme a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo previsto en los artículos 13 constitucional y 57 del Código de Justicia Militar, la justicia militar se encuentra impedida para investigar, juzgar y sancionar delitos en los que el sujeto pasivo sean civiles.

Bajo dicha consideración, es posible advertir que la averiguación previa requerida por el particular se refiere exclusivamente a la investigación, por parte del fuero militar, de delitos cometidos presuntamente por personal castrense en contra del orden y disciplina de ese ámbito.

Adicionalmente, cabe señalar que el orden y la disciplina militar son bienes jurídicos cuya finalidad reside en proteger el adecuado funcionamiento del Ejército y la administración militar, lo anterior a efecto de que el Ejército cumpla con las atribuciones que le son conferidas por la legislación militar, como lo es la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación (fracción I, del artículo 1º de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos).

A mayor abundamiento, se considera que el orden y la disciplina militar van encaminados a preservar el orden público militar; es decir, velar por el adecuado funcionamiento de la organización militar y la consecución de sus fines.

Lo anterior guarda relación con lo establecido en el Reglamento General de Deberes Militares, en el cual se establece que la disciplina es la norma a que lo militares deben sujetar su conducta; tiene como bases la obediencia, y un alto concepto de honor, de la justicia y de la moral, y por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las Leyes y Reglamentos Militares.

Cabe destacar que en el presente caso no se tuvo acceso a la información clasificada, por lo que no fue posible evidenciar si los hechos contenidos en la averiguación previa solicitada se relacionan con violaciones graves a derechos



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

VOTO PARTICULAR
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

humanos; sin embargo, existen elementos normativos de los cuales se desprende que la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene facultades para investigar violaciones graves a derechos humanos, lo anterior derivado de los razonamientos expuestos.

De este modo, el expediente abierto versus el personal castrense con motivo de la comisión de delitos en contra del orden y disciplina militar, es independiente y distinto de aquél tramitado por la justicia penal ordinaria respecto de los delitos seguidos en contra del mismo personal y que han sido considerados como violaciones graves de derechos humanos.

En consecuencia, la causal de reserva aducida por la Secretaría de la Defensa Nacional resulta procedente, conforme a lo previsto en el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que lo solicitado se refiere a una averiguación previa que forma parte de la causa penal 338/2014 radicada en el Juzgado Sexto Militar, la cual se encuentra en etapa de instrucción, por lo que no se ha dictado la sentencia respectiva, y por ello tal información debe permanecer con carácter de reservada por dos años, o hasta en tanto se emita la resolución correspondiente y ésta cause estado.

Asimismo, no se actualiza la causal de excepción a la reserva prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, en el sentido de que no puede invocarse el carácter de reserva cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, puesto que como ya se indicó, la averiguación previa solicitada se sigue en contra de personal castrense exclusivamente por delitos relacionados con el orden y disciplina militar.

De conformidad con los argumentos vertidos, emito el presente voto particular, en razón de que si bien acompaño el sentido de la resolución que nos ocupa, considero necesario enfatizar que conforme a los estándares internacionales contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el marco jurídico nacional y la



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

VOTO PARTICULAR

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos

Expediente: RDA 0463/15

Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa Nacional

Folio: 0000700227014

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la averiguación previa solicitada se sigue en contra de personal militar sólo por lo que se refiere a delitos del orden y disciplina militar, y por ello la misma es distinta de aquélla iniciada por la justicia penal ordinaria con motivo de violaciones graves a derechos humanos; por lo que constituye información reservada en términos de lo previsto en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el artículo 21, fracción X del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, y la Regla Décima Tercera, numeral 6 de las *Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, respecto de la resolución del recurso de revisión número RDA 0463/15, interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, votado en la sesión plenaria de fecha 24 de junio de 2015.

I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO.

Un particular requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional una versión pública de la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por delitos militares en los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. Cabe señalar que el particular aludió a la excepción de reserva establecida en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, esto es: "no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad".

En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que la información se encuentra reservada por 12 años con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, en virtud de que se trata de un expediente judicial que no ha causado estado, y la causa penal que se instruye es exclusivamente por delitos del orden militar, por lo cual, no se encuentra en el supuesto que prevé el último párrafo del artículo 14 de la citada Ley.

Cabe señalar que dicha reserva fue confirmada por el Comité de Información de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se proporcionó al particular una versión digitalizada de la resolución en que se confirmó la reserva.

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, mediante el cual hizo valer como agravio la negativa de acceso a la información, derivada de que la misma fue clasificada como reservada. Nuevamente el particular argumentó que el caso en particular actualiza la excepción a la reserva contenida en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Al respecto, el recurrente argumentó que los hechos ocurridos en Tlatlaya han sido reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como violaciones graves o especialmente graves de derechos humanos en su recomendación 51/2014. Asimismo, el particular aludió que el Pleno de este Instituto en la resolución del recurso de revisión RDA 4821/14 revocó la clasificación de

información hecha por la Procuraduría General de la República con motivo de las averiguaciones previas por los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, por considerar que se trataba de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. De igual forma, el particular aludió a la resolución del Pleno de este Instituto en el recurso de revisión RDA 5366/14, en la cual se ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar información que forma parte de las averiguaciones previas relacionadas con hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero, al considerar que todas las diligencias sobre el caso estaban sujetas a un interés público superior al estado de reserva por tratarse de un caso de violaciones graves a derechos humanos.

En vía de alegatos, la Secretaría de la Defensa Nacional ratificó la reserva de la información solicitada. Nuevamente el sujeto obligado reiteró que lo solicitado se trata de un expediente judicial que no ha causado estado, aunado a que la causa penal que se instruye a los militares, es por la probable responsabilidad en la comisión de delitos por desobediencia e infracción de deberes militares a un Teniente, y por infracción de deberes militares al personal de tropa según su comisión o empleo, previstos en los artículos 301 y 382 del *Código de Justicia Militar*. En ese sentido, la dependencia alegó que tales ilícitos no están considerados como constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos como equivocadamente lo indicó el recurrente.

Así, en relación con este caso, la mayoría del Pleno de este Instituto, consideró procedente modificar la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que, a su juicio, la información requerida actualiza la causal de clasificación prevista en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, no obstante el periodo de reserva debe modificarse de 12 a 2 años, o bien, hasta en tanto no se emita la respectiva sentencia, y ésta cause estado.

En sentido contrario, el disenso radica en que el presente asunto se abordó, desde mi óptica, mediante una perspectiva equivocada, pues se hace una interpretación limitada de la excepción a la reserva establecida en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*; mientras que, el que suscribe, considera que dicha excepción debió interpretarse de conformidad con el principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 6° de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y 6 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, y en atención al derecho a la verdad respecto de hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos. Derivado de ello, concluyo que, en el asunto bajo estudio no podía actualizarse la reserva invocada por el sujeto obligado como se expone a continuación.

II.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL VOTO DISIDENTE.

Como punto de partida, cabe señalar que en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, se establece lo siguiente:

"Artículo 14. También se considerará como información reservada:

...

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado."

Por su parte, en el artículo 27 del Reglamento de la Ley se señala que, al clasificar expedientes y documentos como reservados, los titulares de las unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en el artículo 14 de la Ley en cita.

En seguimiento a lo anterior, el numeral Octavo, párrafo segundo de los *Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal –en lo sucesivo Lineamientos Generales–*, dispone que al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14 y 18 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, bastará con que la misma encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos artículos.

A su vez, en el Vigésimo Séptimo de los de los *Lineamientos Generales*, se establece que para los efectos de la fracción IV del artículo 14 de la Ley, se considerará reservada la información contenida en los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, relativa a aquellas actuaciones y diligencias propias del juicio o procedimiento respectivo de acuerdo a la legislación aplicable, en tanto estos no hayan causado estado o ejecutoria.

De conformidad con lo anterior, se advierte que para invocar el supuesto de reserva previsto en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, es requisito que la información forme parte de expedientes judiciales, hasta en tanto los mismos no causen estado, además es necesario que el procedimiento del cual forme parte la información solicitada reúna las siguientes características:

1. Que se trate de un procedimiento judicial o de índole administrativo seguido en forma de juicio;
2. Que el procedimiento respectivo no haya causado estado, y
3. Que se trate de actuaciones y diligencias propias del juicio o del procedimiento administrativo.

Por tanto, a efecto de determinar la procedencia de la clasificación de la información solicitada con base en el artículo 14 de la Ley de la materia, es indispensable acreditar que la misma forma parte de algún expediente judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no haya causado estado y que se refiera a las actuaciones y diligencias propias del juicio o del procedimiento administrativo respectivo.

Así, durante la sustanciación del presente recurso de revisión la Secretaría de la Defensa Nacional manifestó que la averiguación previa solicitada por el particular forma parte integral de la causa penal 338/14, misma que se encuentra en la etapa de instrucción, existiendo pruebas pendientes por desahogarse. En ese tenor, se puede advertir que se cumplen con los elementos que actualizarían la causal de reserva establecida en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, por cuanto hace las actuaciones y diligencias propias del juicio.

No obstante, para el caso que nos ocupa, resulta relevante referir que el propio artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, en su último párrafo ordena que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trata de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

En relación con lo anterior, el artículo 36 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, establece que se considerarán como violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad los que se establezcan como tales en los tratados ratificados por el Senado de la República o en las resoluciones internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones legales aplicables.

Derivado de lo anterior, si bien es cierto que se cumplen con los elementos que actualizarían la causal de reserva establecida en el artículo 14, fracción IV de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, por cuanto hace las actuaciones y diligencias propias del juicio, resulta imperante determinar si lo solicitado se relaciona con la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, a efecto de poder determinar si se actualiza la excepción a la reserva de información.

En este contexto, y de acuerdo con la normativa antes descrita, considero pertinente exponer los puntos de mi disenso, respecto de los argumentos rendidos por la mayoría del Pleno de este Instituto en la resolución de referencia.

A) Lo solicitado se relaciona con violaciones graves de derechos humanos.

Es de señalar que en la resolución avalada por la mayoría del Pleno de este Instituto, se respaldó el argumento hecho valer por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el sentido de que **los delitos que se investigan** en la causa penal 338/2014, radicada en el Sexto Juzgado Militar, son desobediencia e infracción de deberes militares de conformidad con los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar; ilícitos que en ningún ordenamiento legal están considerados como constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos.

En ese tenor, el proyecto de resolución argumentó que, derivado de diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han realizado modificaciones a la normatividad que regula el fuero militar; de tal forma que los delitos cometidos por militares en que se involucre a civiles deben ser investigados por el fuero común o federal y no así en el fuero militar. Asimismo, se argumentó que el fuero militar queda limitado estrictamente a delitos por faltas a la disciplina militar, como es desobediencia militar o infracciones a los deberes militares.

Seguido de lo anterior, en el proyecto de resolución se expone que, si bien los hechos acaecidos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, fueron catalogados como violaciones graves a derechos humanos, no puede actualizarse la excepción a la reserva de información establecida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley, en tanto que **los delitos** que se juzgan en la causa penal número 338/14, son delitos del orden castrense, cuyo bien jurídico tutelado es la disciplina militar y no derecho humano alguno.

Así las cosas, el proyecto de resolución aprobado por la mayoría del Pleno, concluye que los tribunales militares sólo son competentes **para juzgar de delitos** que atentan contra bienes jurídicos tutelados propios del orden castrense, y no por acciones u omisiones que deriven en violaciones de derechos humanos.

Contrario a lo anterior, considero que en este caso en particular, la mayoría del Pleno que acompañó el proyecto de resolución, realizó una interpretación limitada de la excepción a la reserva establecida en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, mismo que a la letra dispone:

"No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad."

Ahora bien, para un mayor entendimiento del precepto legal en cita, conviene retomar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 168/2011, respecto de dicha excepción a la reserva de información expresó lo siguiente: "... esta sala observa que la *LFTAIPG* establece que las averiguaciones previas **sobre hechos posiblemente constitutivos** de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad carecen del carácter de información reservada".

Así las cosas, es posible observar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que la excepción de reserva establecida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, refiere a aquellas averiguaciones previas **sobre hechos** que **posiblemente** constituyen violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, debe retomarse que en la sentencia del amparo 1371/2013, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, aclaró que este Instituto “*cuenta con facultades para pronunciarse prima facie sobre violaciones graves de derechos humanos únicamente para efectos de asumir y ejercer sus propias competencias en materia de acceso a la información...*”.

Lo anterior resulta de la mayor relevancia, dado que, en cumplimiento a lo señalado en dicha sentencia de amparo, en diversas resoluciones el Pleno de este Instituto ha realizado un ejercicio *prima facie* **respecto de los hechos** que se investigan, para determinar si la investigación versa o no sobre posibles violaciones graves a derechos humanos. Lo anterior, **con total independencia de la calificación del delito** que realizó la autoridad investigadora.

Es en este punto, en el cual disiento con de la mayoría del Pleno que, en este caso en particular, respalda el argumento esgrimido por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el sentido de que los **delitos investigados** en la averiguación previa que solicita el particular, sólo versan respecto de los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares y que por tal motivo no pueden constituir violaciones graves a derechos humanos.

Es preciso señalar que los hechos del caso Tlatlaya, han sido estudiados por el Pleno de este Instituto en los recursos de revisión RDA 4821/14, RDA 5152/14, RDA 5159/14, y RDA 5389/14, interpuestos en contra de la Procuraduría General de la República. En todos ellos, dicho sujeto obligado aludió que sólo investigaba la probable comisión del delito de homicidio.

Considero que contrario a los ejercicios *prima facie* realizados en otros recursos de revisión, donde el análisis determinante ha sido respecto de los hechos, y no así de la calificación del delito que realizó la autoridad competente; en el presente caso, sí fue determinante para la mayoría del Pleno que aprobó el proyecto de resolución, la calificación del delito que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior, pese a que se reconoce en la propia resolución que **los hechos** acaecidos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, **están catalogados como violaciones graves a derechos humanos**.

Sobre este punto en particular, conviene resaltar que dicha calificación de los hechos, no fue producto de un ejercicio *prima facie* realizado por este Instituto, sino que, tal calificación fue realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien, mediante el comunicado de prensa número CGCP/007/15, del 13 de enero de 2015, **dio a conocer que reclasificaría el caso de Tlatlaya como una investigación de violaciones graves de derechos humanos** con la finalidad de que las autoridades a quienes fue dirigida **la Recomendación 51/2014**, tomaran en cuenta los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la citada recomendación.

Es así que, si la propia resolución reconoce que los hechos ocurridos en el caso Tlatlaya, son constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, no resulta acorde a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, reservar la información solicitada bajo el argumento de que los delitos investigados sólo tienen como bien jurídico tutelado la disciplina militar y no derecho humano alguno.

En síntesis, considero que los documentos solicitados por el particular sí se relacionan con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos.

B) Las resoluciones de Instituto no califican los delitos que se investigan, los probables responsables, ni determina la competencia del fuero que debería investigar tales acciones.

Ahora bien, como ya lo referí previamente, los argumentos aportados en la resolución que aprobó la mayoría del Pleno, refieren que el fuero militar queda limitado estrictamente a delitos por faltas a la disciplina militar, como son: desobediencia militar o infracciones a los delitos militares; y que por tal motivo, en ese fuero no se podría conocer de delitos que vulneren derechos humanos.

En este punto, quiero señalar que coincido en que, tanto las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han derivado en modificaciones a la normatividad que regula el fuero militar; y han precisado que, los tribunales militares no pueden conocer de delitos que vulneren derechos humanos de civiles, lo cuales en su caso deben ser investigados por el fuero común o federal.

No obstante, debe precisarse que las resoluciones de este Instituto son únicamente para efectos de acceso a la información, **en ningún momento pretenden calificar los delitos que se investigan**, los probables responsables, ni determinar la competencia del fuero que debería investigar tales acciones.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el citado Amparo en Revisión 168/2011, aclaró respecto de la excepción a la reserva contenida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, lo siguiente:

"... Esto no quiere decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública cuente con facultades para determinar si se han actualizado las hipótesis antes descritas, ni quienes serían los responsables.

... Adicionalmente, la calificación de los hechos dentro de alguna de las categorías en comento podrá realizarse por la autoridad judicial competente."

Así las cosas, partiendo del supuesto expuesto en el apartado anterior, considero que la argumentación de la competencia del fuero, en caso de violaciones graves a derechos humanos, no debe ser el punto toral para desvirtuar la excepción a la reserva establecida en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Como lo expuse previamente, considero que la excepción a la reserva aludida, **refiere a la investigación de hechos** que constituyeron violaciones graves a derechos humanos, **con independencia la calificación del delito** que sobre tales hechos realice la autoridad y, por ende, de la determinación del fuero que investigara los mismos.

Derivado de lo anterior, concluyo que las resoluciones que emite el Pleno de este Instituto, sólo tienen efectos exclusivamente para efecto de brindar o no acceso a la información solicitada.

C) El derecho a la verdad como medida de reparación

Considero que un punto que no fue tomado en cuenta en la resolución aprobada por la mayoría del Pleno, consiste en reconocer el derecho a la verdad como una medida de reparación ante hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos.

Al respecto, conviene retomar que en la citada sentencia de amparo 1371/2013, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, realiza un estudio del significado del derecho a la verdad, de la cual conviene destacar los siguientes argumentos:

"El derecho a la verdad –reconocido explícitamente como respuesta a las desapariciones forzadas- se aplica también a otras violaciones graves a los derechos humanos."

"El esclarecimiento de la verdad puede iniciar el proceso de reconciliación en tanto que la negación y el silencio pueden incrementar la desconfianza y la polarización."

*"... de un análisis a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se advierte que ha reconocido el derecho a la verdad de las víctimas, los familiares más cercanos y **la sociedad en su conjunto**, y en este sentido ha sostenido lo siguiente:*

- *El estado está obligado a proveer a las familias de las víctimas la verdad sobre las circunstancias relativas a los crímenes.*
- ***El resultado de todos los procedimientos de investigación debe ser divulgado al público para que 'la sociedad sepa la verdad'.***"

*"Por lo anterior **cobra una especial relevancia la necesidad de permitir el acceso a la información que conste en averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad**, pues estos supuestos no sólo afectan a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos*

antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican.”

“Aún y cuando en muchos casos dichas violaciones sí se presentan en contextos generalizados de violencia, se considera que las “gravedad” radica, esencialmente en que se presenten las siguientes características: (i) multiplicidad de violaciones dentro del fenómeno delictivo; (ii) especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y (iii) una participación importante del Estado (al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado).”

De lo anterior se desprende que el derecho a la verdad se aplica en casos de violaciones graves a los derechos humanos, como una forma de reparación para que, tanto familiares como la sociedad en su conjunto, **conozcan la verdad de dichos hechos** a través del acceso a la información. Esto es así, ya que **el esclarecimiento de la verdad puede iniciar el proceso de reconciliación en tanto que la negación y el silencio pueden incrementar la desconfianza y la polarización.**

En esa tesitura, en el reconocimiento del derecho a la verdad en caso de violaciones graves a derechos humanos se ha sostenido que: **el resultado de todos los procedimientos de investigación deben ser divulgados al público, para que la sociedad sepa la verdad.**

Asimismo, se resalta que la violación a derechos humanos **puede derivar de actos cometidos por agentes estatales o por la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado.** Esto es, se parte de que la calificación de violaciones graves a derechos humanos, no sólo contempla la actuación de un agente del Estado de forma activa, sino que también contempla omisiones que no necesariamente encuadran en un tipo penal.

Conviene resaltar que, respecto de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, el propio Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en la misma sentencia en cita, consideró *prima facie* que existieron violaciones graves a derechos humanos exclusivamente para efectos del acceso a la información, sin que dichas violaciones fueran referidas a un tipo penal determinado **cuyo actor fuera un agente estatal en específico**; sino por la tolerancia del Estado respecto de determinados crímenes en contra de migrantes.

Lo anterior, encuentra lógica con lo expuesto en el apartado A) de los argumentos que sustentan el presente voto, en el tenor de que el **estudio de los hechos** es lo que permite concluir, para efectos exclusivos del derecho de acceso a la información, que un asunto refiere a violaciones graves a derechos humanos, y no así, la calificación del delito que, sobre estos hechos, realicen las autoridades competentes.

Sostengo que el conocer la verdad de los hechos es una forma de reparación, ya que el Estado, quien de forma activa o por omisión ofendió a la sociedad; devela que está realizando todas las

investigaciones necesarias para impartir justicia y determinar las responsabilidades correspondientes.

En este punto, me permito hacer eco del Informe final sobre el caso Tlatlaya que presentó el Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014¹, donde se expone lo siguiente:

“En el informe, aprobado durante su última reunión de trabajo, se considera que el esclarecimiento de los hechos debe tener como consecuencia necesaria, acciones y proyectos por parte del Estado en su conjunto para la prevención, investigación, sanción y no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos.

...

Se establece que es notoriamente insuficiente la información aportada por la SEDENA, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno estatal, por lo que es necesario hacerles un respetuoso llamado para que faciliten la rendición de cuentas al Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, en especial, a partir de la consideración de que en el Caso Tlatlaya se configura un caso de violaciones graves a los derechos humanos.

...

*Indica que **ni la independencia del ámbito jurisdiccional civil y militar, ni la separación de Poderes ni la diferencia entre facultades de distintas instituciones públicas, pueden constituirse en obstáculo para el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio pleno de los derechos humanos.***

En ese tenor concuerdo en que, el derecho a la verdad constituye una forma de reparación y puede iniciar el proceso de reconciliación, en tanto que, al conocer la verdad de los hechos, la sociedad puede entablar un diálogo con sus autoridades a efecto de promover acciones y políticas para la prevención y no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos.

De esta forma, consideró que **todas las investigaciones que resultan de los hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos deben ser públicas**, con independencia de la determinación del tipo penal que realice la autoridad competente y del fuero que tipifica e investiga los posibles delitos; ya que de esta forma, la sociedad puede conocer la verdad de los hechos.

D) Ante la duda o el vacío legal debe primar el derecho de acceso a la información

¹ Disponible en: <http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Abril/16/5471-Diputados-presentan-informe-final-sobre-caso-Tlatlaya>

En este punto es necesario precisar que, en una primera discusión del proyecto de resolución –en la sesión celebrada el 03 de junio de 2015-, se hizo notar que, pese a que el Comisionado Ponente citó a un acceso a la información clasificada, el sujeto obligado fue omiso en presentar los documentos.

En ese momento, la mayoría del Pleno determinó diferir la votación del recurso y requerir nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional que presentara los documentos clasificados; **ello con la finalidad de contar con mayores elementos para resolver el asunto.**

En atención a la solicitud realizada por la mayoría del Pleno, el Ponente citó nuevamente al sujeto obligado para que mostrara a este Instituto la información clasificada, sin embargo, de forma reiterada la Secretaría de la Defensa Nacional fue omisa en presentar la documentación. Al respecto la dependencia señaló que cualquier requerimiento de consulta al expediente debía ser solicitado oficial y directamente al Juez Sexto Militar.

No pasa desapercibido que, ante la solicitud del Comisionado Ponente para consultar el expediente, el Juez Sexto Militar señaló que consultaría a las partes la pretensión de este Instituto de acceder a la averiguación previa.

Como puede observarse, de forma reiterada el sujeto obligado desatendió lo dispuesto por el último párrafo del artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: *"En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso"*.

Derivado de lo anterior, también me permito disentir del proyecto de resolución aprobado por la mayoría del Pleno, ya que, advirtiendo todo lo expuesto en los apartados anteriores del presente voto; considere necesario contar con los elementos necesarios que me permitieran tener certeza de que, en la averiguación previa solicitada, no obrasen documentos en que constaran hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.

Luego así, conviene destacar que en la citada sentencia de amparo 1371/2013, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a manera de extrañamiento, señaló que, "...si el IFAI tenía dudas al respecto, las autoridades deben regirse por los principios de buena fe, de máxima divulgación y como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Gomes Lund vs Brasil* respecto de violaciones graves de derechos humanos. **'ante la duda o el vacío legal debe primar el derecho de acceso a la información....'**"

Así las cosas, si bien la mayoría del Pleno concluyó que no fue necesaria la celebración de un acceso a los documentos solicitados, porque en estos no podría obrar información respecto de la

investigación de delitos que vulneraran derechos humanos; como lo expuse en apartados anteriores, los hechos conocidos sobre el caso Tlatlaya, y la calificación que sobre estos realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no me pueden ser ajenos y, por tanto, generar la duda, de que en la averiguación previa solicitada no obren documentos en que consten hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos; por lo cual atendiendo el principio antes referido, considero que en el presente caso debió primar el derecho de acceso a la información acorde al principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 6° de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y 6 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

E) Observaciones adicionales.

Es preciso señalar que, no considero correcto modificar la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, para efecto de que se le requiriera emitir una nueva resolución en la que precisara que lo solicitado no contiene información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, como fue propuesto por algunos de mis colegas que también manifestaron disidencia con el proyecto de resolución.

Al respecto, me permito retomar el caso *Gomes Lund vs Brasil*² en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló lo siguiente:

"202. Finalmente, el Tribunal también ha establecido que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes. Asimismo, **cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito.** De igual modo, tampoco puede quedar a su discreción la decisión final sobre la existencia de la documentación solicitada."

Como se observa la decisión de reservar una información y negar su entrega no puede depender exclusivamente del Órgano a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito.

✓ Consideró que dicha posición, contraviene la fracción VIII del apartado A del artículo 6° la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, en tanto que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales

² Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf

en posesión de los sujetos obligados. Esto es, la facultad para determinar si una información es pública o bien, puede ser reservada, no podría delegarse a la propia autoridad que, de inicio, reservó la información.

III.- CONCLUSIÓN.

A partir de los razonamientos vertidos, formulo el presente voto exponiendo mi disenso con la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, porque considero que no procede la reserva de la información solicitada, invocada por la Secretaría de la Defensa Nacional; toda vez que a mi consideración se actualiza la excepción a la reserva establecida en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Por tal razón, considero que lo procedente para el caso de estudio hubiera sido revocar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, e instruirle a efecto de que entregara los documentos solicitados por el particular, en su caso, mediante la elaboración de una versión pública en la que se eliminaran los datos personales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, 43 y 45 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, y 70, fracción IV de su Reglamento.

Respetuosamente


Joel Salas Suárez
Comisionado 